

TERCERA SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE MEXICO.

EXPEDIENTE: 20485/22-17-03-7

ACTOR: ** ***** ** ***** ** *

MAGISTRADO INSTRUCTOR: JOSÉ NAPOLEÓN FILLAT MARTÍNEZ

SECRETARIO DE ACUERDOS: JORGE ALBERTO CAMARGO CASTELAN.



CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA

Ciudad de México, a **veintidós de octubre de dos mil veinticinco.- VISTOS** los autos del juicio contencioso administrativo citado al rubro, para dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada el doce de agosto de dos mil veinticinco, por el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito, en el juicio de amparo con número de expediente **D.A. 730/2023**, promovido por la parte enjuiciada en contra del fallo definitivo de siete de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el juicio en que se actúa; estando debidamente integrada la Tercera Sala Regional en la Ciudad de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por los Magistrados **JORGE OCTAVIO GUTIÉRREZ VARGAS**, adscrito a esta Sala a partir del 2 de enero de 2025, conforme a lo dispuesto en el segundo punto resolutivo, fracción I, inciso b) del Acuerdo G/JGA/44/2024, dictado por la Junta de Gobierno y Administración de este Tribunal, en sesión de 13 de diciembre de 2024, **JOSÉ NAPOLEÓN FILLAT MARTÍNEZ**, como Instructor en el presente juicio, **CELINA MACÍAS RAYGOZA** en su carácter de Presidenta de la Sala; ante el Secretario de Acuerdos, **JORGE ALBERTO CAMARGO CASTELAN**, quien da fe, proceden a dictar sentencia atendiendo lo dispuesto por los artículos 49, 50, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y:

RESULTANDO

1°. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes Común para las Salas Regionales Metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el **veinticuatro de agosto de dos mil veintidós**, el **C. ****** en representación legal de ****** demandó la nulidad de la resolución **NEGATIVA FICTA** recaída Al escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, ante la **ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA JURÍDICA DEL DISTRITO FEDERAL "1" DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**, por medio del cual, interpuso recurso de revocación en contra del oficio número ********* de diez de febrero del año en curso, emitida por la **ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE AUDITORÍA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL "1" DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**, por medio del cual, se le autorizó parcialmente la devolución por concepto de saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al mes de Enero de 2016.

2°. Mediante proveído de **seis de septiembre de dos mil veintidós**, se admitió a trámite la demanda, así como las pruebas ofrecidas en el capítulo respectivo, emplazando a la autoridad demandada, para que en el término que marca la Ley, formulara su contestación respectiva.

3°. Por acuerdo de **dieciocho de noviembre de dos mil veintidós**, se tuvo por contestada la demanda, por admitidas las pruebas ofrecidas, así como de conformidad con el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se le concedió término a la parte actora para que formulara su ampliación de demanda.

4°.- Por acuerdo de **dos de febrero de dos mil veintitrés**, se tuvo por formulada la ampliación de demanda, otorgándose término legal a la autoridad demandada, para que en el término de Ley formulara su contestación respectiva.

~ 3 ~

5°. Mediante proveído de **veinticuatro de abril de dos mil veintitrés**, se tuvo por contestada la ampliación de demanda, y toda vez que no existían cuestiones pendientes por desahogar, se concedió término a las partes para que formularan alegatos.

6°. Por acuerdo de primero de agosto de dos mil veintitrés, por ministerio de ley, quedó cerrada la instrucción del presente juicio, turnándose los autos a la Sala, para que resolviera lo que en derecho procediera.

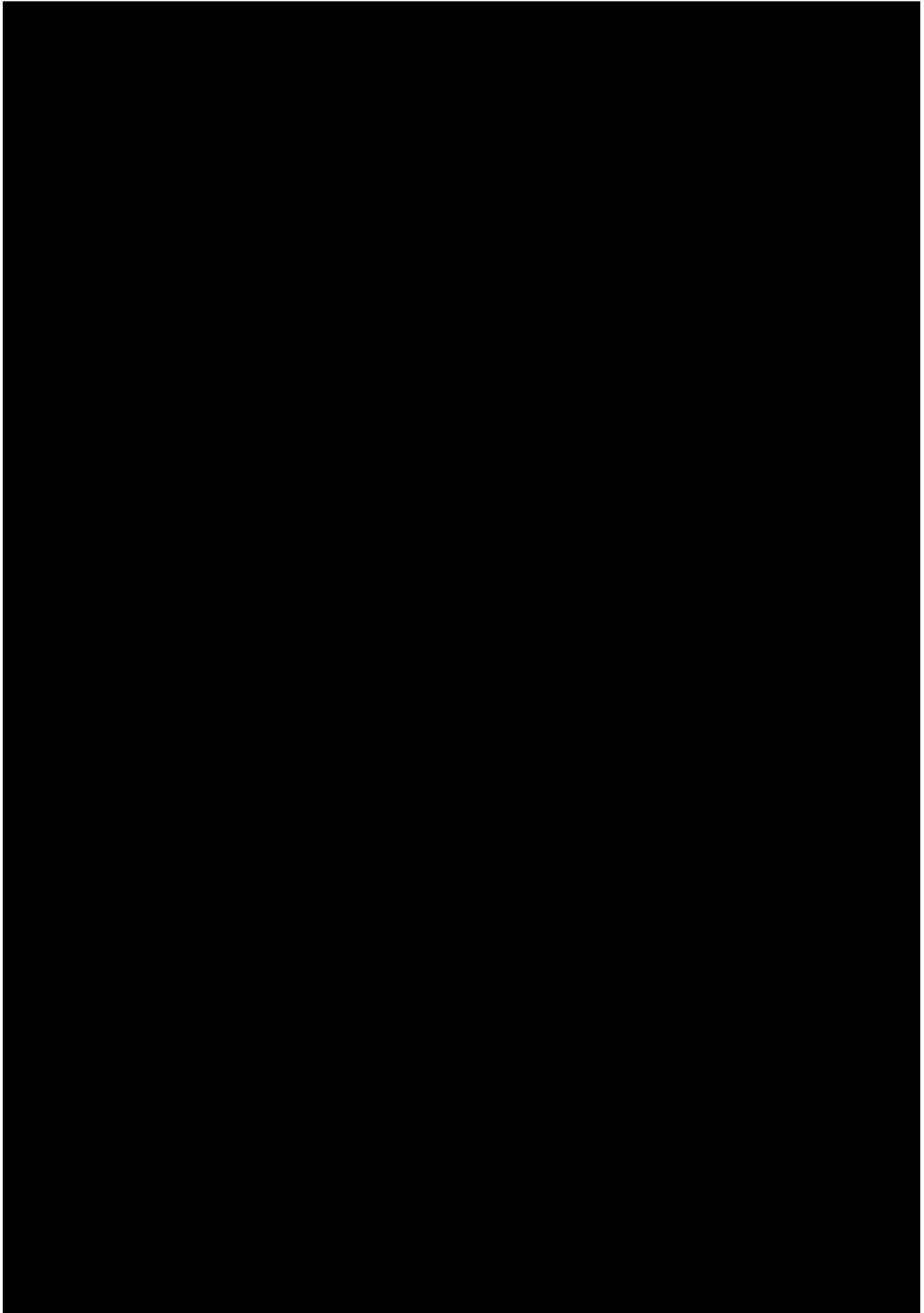
7°. Mediante fallo definitivo de siete de agosto de dos mil veintitrés, se resolvió en definitiva el presente juicio, en el sentido de reconocer la validez del acto impugnado como del originalmente recurrido.

8°. Inconforme con dicha determinación, la parte actora interpuso juicio de amparo, el cual por cuestión de turno toco conocer al Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, radicándolo bajo el número consecutivo D.A. 730/2023 de su índice estadístico, el cual fue resuelto mediante ejecutoria de doce de agosto de dos mil veinticinco, en el sentido de conceder el amparo solicitado por el quejoso.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Esta Sala procede a continuación a transcribir los razonamientos expresados por el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en

Materia Administrativa de Primer Circuito, para dejar insubsistente la sentencia dictada por esta Sala el siete de agosto de dos mil veintitrés, en los siguientes términos:





TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

TERCERA SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE
MÉXICO.

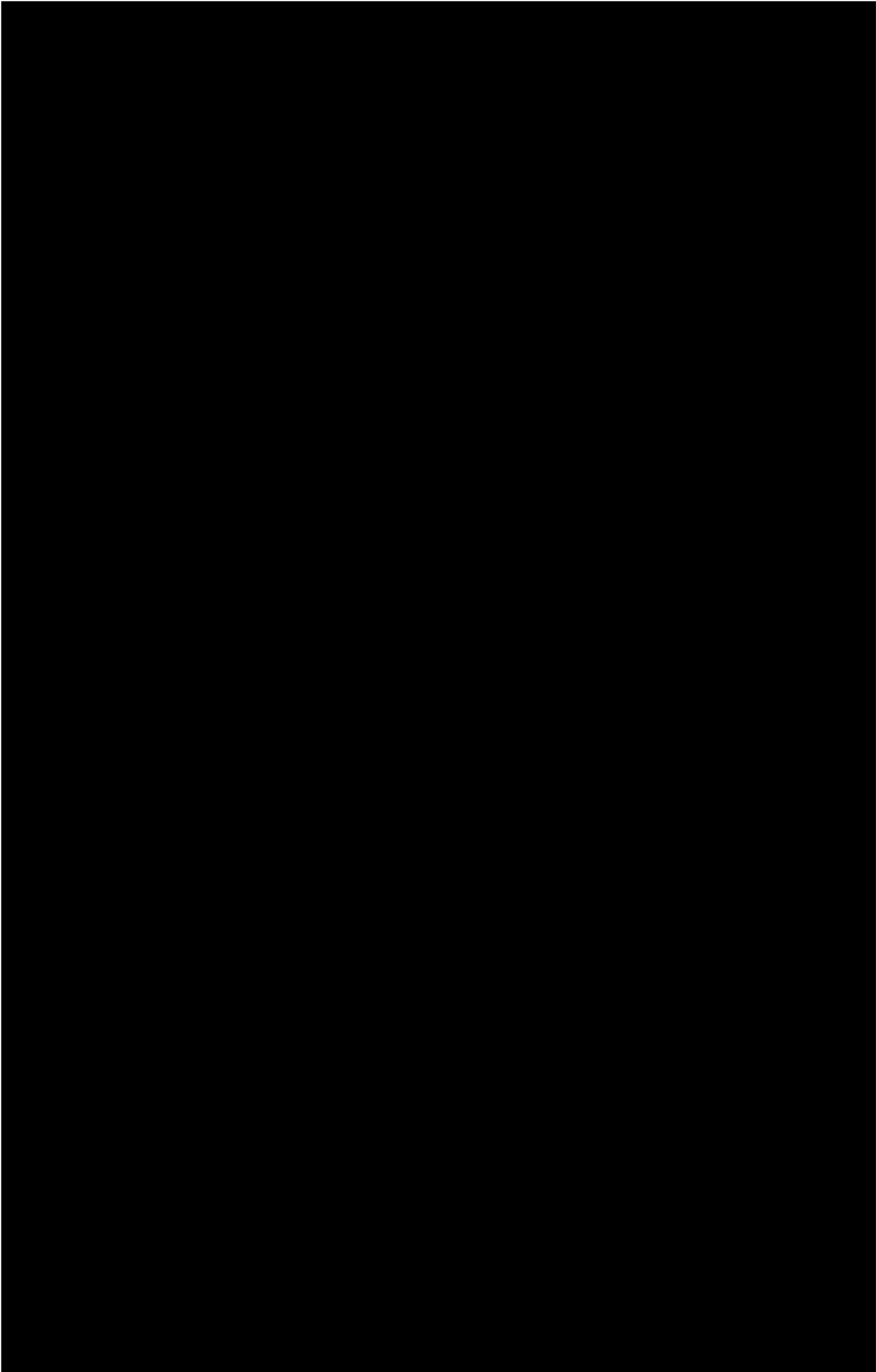
EXPEDIENTE: 20485/22-17-03-7

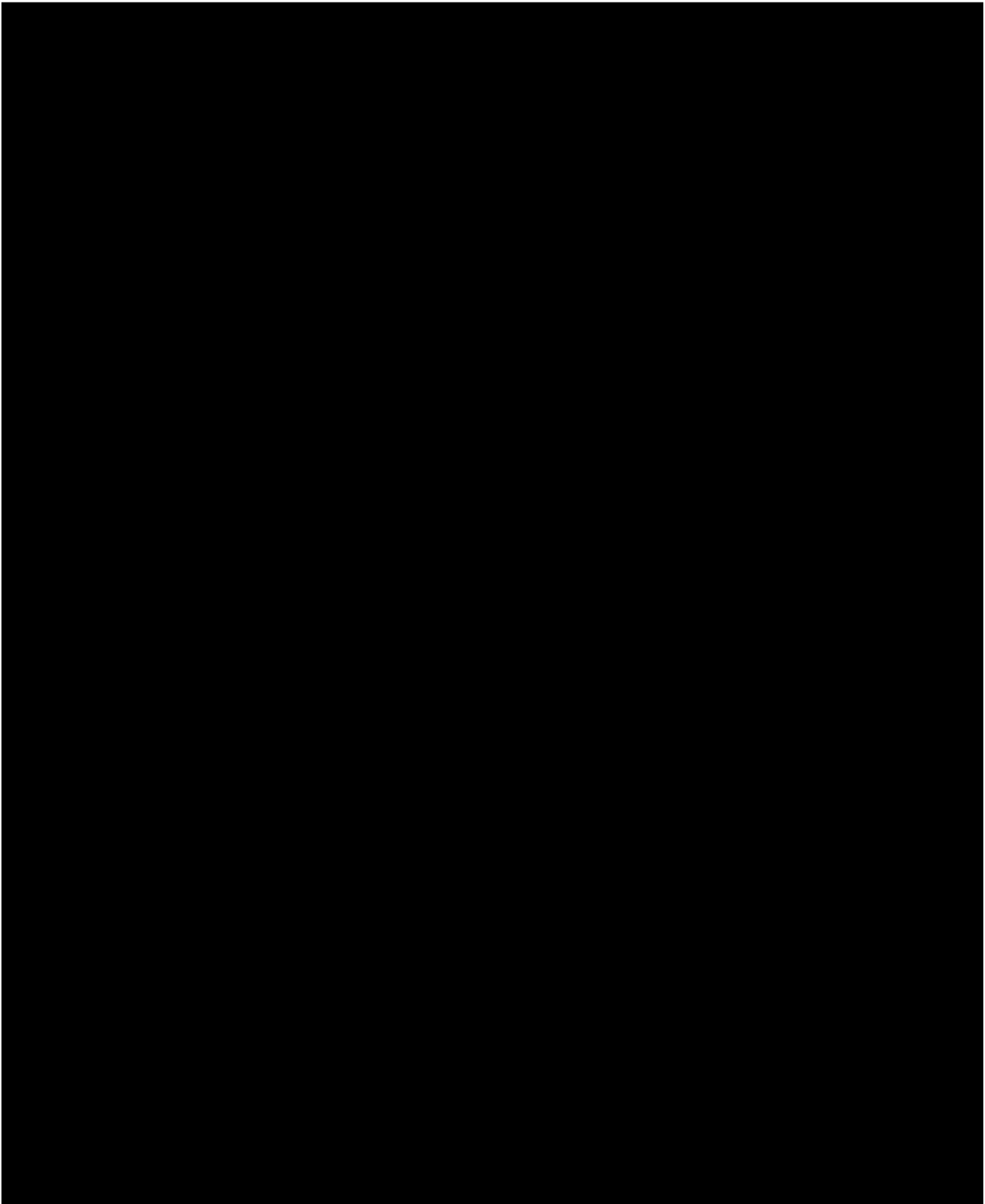
ACTOR: ** ***** ** ***** ** *



TRABAJANDO POR MÉXICO

~ 5 ~





SEGUNDO. Esta Sala es competente por materia para conocer del presente asunto, en términos de lo dispuesto por los artículos 3º, fracciones III y XV, y 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, **publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de julio de dos mil dieciséis;** así como los artículos 48, fracción XVII y 49, fracción XVII del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de julio de dos mil veinte.

~ 7 ~

TERCERO. La existencia de la resolución impugnada se encuentra debidamente acreditada, toda vez que fue aportada en el juicio por la parte actora en documento impreso con un sello expresado en caracteres, generado mediante el uso de su firma electrónica avanzada y amparada por un certificado, y por tanto reviste el carácter de documental pública, que en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia contenciosa administrativa, hace prueba plena.

CUARTO. En primer término y por tratarse de uno de los requisitos para la procedencia del juicio, esta Juzgadora se avoca al análisis de la existencia de la resolución negativa ficta impugnada, en los siguientes términos:

A fin de determinar si en el presente caso se configuró o no la negativa ficta en cuestión, conviene precisar que la parte actora aduce en el escrito de demanda, que el 28 de marzo de 2022, interpuso recurso de revocación en contra del oficio número ***** de diez de febrero del año en curso, emitida por la **ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE AUDITORÍA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL "1" DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**, por medio del cual, se le autorizó parcialmente la devolución por concepto de saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al mes de Enero de 2016.

Mientras tanto, la autoridad demandada al contestar la demanda justificó la confirmativa ficta, haciendo suyos los razonamientos expuestos en la resolución expresa contenida en el oficio número ***** de 04 de noviembre de 2022.

A juicio de los suscritos Magistrados, en el caso concreto **SE CONFIGURÓ** la resolución negativa ficta impugnada, en virtud de lo siguiente:

De las constancias que obran en autos se advierte que efectivamente, el 28 de marzo de 2022, la enjuiciante presentó el escrito por medio del cual interpuso recurso de revocación en contra del oficio número ***** de diez de febrero del año en curso, emitida por la **ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA DE AUDITORÍA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL "1" DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**, por medio del cual, se le autorizó parcialmente la devolución por concepto de saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al mes de Enero de 2016, tal y como se advierte del acuse de recibo de promociones, visible a foja 152 de autos, en el cual consta la fecha de recibido por la demandada **-28 de marzo de 2022-**; en consecuencia, de tal fecha al **24 de agosto de 2022**, día en que la actora presentó el escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común de las Salas Regionales Metropolitanas de este Tribunal, es evidente que transcurrió en exceso el término que marcan los artículos 37, primer párrafo, y 131, del Código Fiscal Federal, que establecen literalmente lo siguiente:

“ARTÍCULO 37.- Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de tres meses; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o bien, esperar a que ésta se dicte.

(...)”

“Artículo 131.- La autoridad deberá dictar resolución y notificarla en un término que no excederá de tres meses contados a partir de la fecha de interposición del recurso. El silencio de la autoridad significará que se ha confirmado el acto impugnado.

~ 9 ~

El recurrente podrá decidir esperar la resolución expresa o impugnar en cualquier tiempo la presunta confirmación del acto impugnado."

De conformidad con el primer precepto transcrito, las autoridades tienen la obligación de resolver las instancias o peticiones que se formulen, en un plazo de tres meses, de lo contrario, transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución respectiva, el particular podrá considerar que la autoridad resolvió de manera negativa, e interponer los medios de defensa correspondientes, o en su caso, esperar a que se dicte la resolución.

Mientras tanto, el segundo de los numerales aludidos, hace referencia a la obligación de la autoridad de dictar y notificar la resolución del recurso de revocación, en un término que no excederá de tres meses, contados a partir de la fecha en que se haya interpuesto, en caso de no hacerlo, se entenderá que se ha confirmado el acto recurrido, por lo que el particular podrá optar por interponer los medios de defensa en contra de dicha confirmación, o bien, esperar a que se dicte la resolución.

Como se ve, ambos preceptos regulan dos figuras semejantes en materia fiscal, las denominadas negativa y confirma ficta, mismas que presumen, por disposición expresa de la ley, que se ha resuelto en sentido contrario a los intereses del particular, razón por la cual se les otorga el derecho de interponer los medios de defensa correspondientes.

En el asunto que nos ocupa, no obstante que la actora impugna la resolución negativa ficta recaída al recurso de revocación intentado, esta Juzgadora estima que no resulta procedente sobreseer el presente juicio, por el hecho de estimar que el acto impugnado no existe,

pues afirma la autoridad que lo que debió impugnar la accionante era la resolución confirmativa ficta.

Lo anterior se afirma, debido a que ello implicaría dejar en total estado de indefensión a la enjuiciante, cuando lo cierto es que:

- Existe una instancia interpuesta, que resulta ser el recurso de revocación presentado el 28 de marzo de 2022.
- La autoridad, en términos de ambos preceptos en estudio, estaba obligada a resolver lo conducente y notificar a la recurrente, en un término de tres meses.
- Transcurrido el término anterior, sin que exista resolución expresa notificada, se entenderá que la resolución no fue favorable (independientemente que sea confirmativa o negativa ficta), y por ende, se podrán interponer los medios de defensa que se estimen pertinentes.

Debido a lo anterior, esta Sala, en uso de la facultad de examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, tal como lo establece el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y tomando en cuenta la semejanza y analogía existente entre las figuras de la confirmativa y negativa ficta, atendiendo al principio de informalidad al favor del administrado, concluye que la causal de improcedencia planteada por la autoridad debe ser desestimada.

Resulta aplicable, por analogía, lo dispuesto por la tesis cuyo texto y datos de identificación son los siguientes.



TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

TERCERA SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE
MÉXICO.

EXPEDIENTE: 20485/22-17-03-7

ACTOR: ** ***** ** ***** **



~ 11 ~

la Federación y su Gaceta XXIII, Mayo de 2006, Página: 1721, Tesis:
I.8o.A.108 A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa

CONFIRMATIVA FICTA. NO DEJA DE TENER EXISTENCIA DICHA FIGURA JURÍDICA NI DEBE SOBRESEERSE EL JUICIO DE NULIDAD PLANTEADO POR EL HECHO DE QUE LA AUTORIDAD DICTE UNA RESOLUCIÓN FAVORABLE QUE SE DÉ A CONOCER A LA PARTE ACTORA AL CONTESTAR LA DEMANDA RESPECTIVA, A MENOS DE QUE AQUÉLLA SATISFAGA PLENAMENTE LA PRETENSIÓN DEDUCIDA. De la interpretación conjunta de los artículos 210, fracción I, 215 y 237 del Código Fiscal de la Federación, se pone de manifiesto que **tratándose de negativa ficta y de confirmativa ficta** en términos del numeral 131 del propio ordenamiento, **la promoción de la demanda de nulidad hace nacer el derecho del actor a que se examine su pretensión en una litis abierta**, en términos de su escrito de demanda y ampliación de la contestación de la autoridad, y hace surgir correlativamente, la obligación del tribunal de pronunciarse sobre todas las cuestiones debatidas. En este sentido, la circunstancia de que durante el juicio la autoridad demandada acredite que con posterioridad a la promoción de la demanda de nulidad notificó a la actora la resolución que declara fundado el recurso interpuesto por ésta, y deja insubsistente el acto impugnado en el mismo por vicios formales o más aún, que exhiba una resolución en esos términos que, ni siquiera fue notificada a la parte actora, no puede dar lugar a sobreseer en el juicio, conforme a los numerales 202, fracción XI y 203, fracciones II y IV, del ordenamiento en cita, al considerar la Sala responsable que la **confirmativa** ficta dejó de tener existencia desde el momento en que se dictó una resolución favorable al recurrente, que se le dio a conocer al correrle traslado con la contestación a la demanda de nulidad, a menos de que con tal resolución se satisfaga plenamente la pretensión deducida en el juicio, pues de no ser así, se dejaría en estado de indefensión a la parte actora al ver

parcialmente satisfecha su pretensión con menoscabo de su derecho procesal a ser oída y vencida en juicio, previsto por la ley como sanción a la inactividad de la autoridad demandada; de ahí que al configurarse la **confirmativa** ficta y promoverse el juicio de nulidad, nace para la demandante el derecho a obtener del tribunal responsable un juicio sobre la legalidad de ésta e implícitamente, del acto impugnado en el recurso administrativo al cual recayó esa resolución ficta, en un litigio abierto, en donde se resuelva sobre todos los vicios de ilegalidad planteados en la demanda y en su ampliación.

OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 202/2005. Corporación Mexicana de Becarios, S.A. de C.V. 25 de agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Leticia Campuzano Gallegos. Secretario: Víctor Aguirre Montoya

De igual forma, es aplicable al criterio anterior, el contenido de la tesis que a continuación se transcribe:

No. Registro: 50,773, Aislada, Época: Sexta, Instancia: Primera Sala Regional Hidalgo – México, Fuente: R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año I. No. 10. Octubre 2008.

Tesis: V-TASR-XII-I-3209, Página: 597

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

CONFIRMATIVA FICTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 131 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO SE ACTUALIZA, CUANDO DEL ESCRITO DE DEMANDA Y ATENDIENDO A LA CAUSA PETENDI DEL ACTOR, SE ADVIERTE QUE LA IMPUGNACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LO ES UNA NEGATIVA FICTA.- La figura de la confirmación ficta se encuentra regulada en el artículo 131 del Código Fiscal de la Federación, y para que se actualice la misma, se deben de cumplir los siguientes requisitos: 1.- La interposición del recurso de revocación, 2.- que haya transcurrido el término de tres



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

**TERCERA SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE
MÉXICO.**

EXPEDIENTE: 20485/22-17-03-7

ACTOR: ** *** ** ***** ** ** ***



~ 13 ~

meses a partir de la interposición del recurso de revocación, y 3.- que la autoridad en dicho plazo no haya resuelto dicho recurso, cuyo silencio se entenderá que confirmó la resolución recurrida. Ahora bien, si del escrito de demanda, se advierte que la parte actora hace alusión a la confirmativa ficta, pero, para sustentar su acción del juicio contencioso administrativo, funda su acción en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación; ello implica que de conformidad a la jurisprudencia y tesis que dicen: "SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SU CONTENIDO Y FINALIDAD EN RELACIÓN CON LA PRETENSIÓN DEDUCIDA"; "PODERES DEL JUEZ, CUANDO LAS PARTES EQUIVOCAN SUS ARGUMENTOS DE DERECHO"; la cuestión efectivamente planteada es indudablemente, que se demandó por parte de la accionante, la figura de la negativa ficta prevista en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación y cuya situación es la que resolverá la controversia planteada. (25)

Juicio Contencioso Administrativo Núm. 6059/06-11-01-7.- Resuelto por la Primera Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 21 de noviembre de 2007, por mayoría de votos.- Magistrada Instructora: María Sofía Sepúlveda Carmona.- Secretario: Lic. Epigmenio Flores Corona.

Además, no debe ser inadvertido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas tesis de jurisprudencia, aplicables por analogía, se ha pronunciado en el sentido de que el análisis de los motivos de inconformidad implica la comprensión de los planteamientos y la finalidad que se persigue con su exposición, sin tecnicismos ni rigorismos, es decir, sin la exigencia de un silogismo formal, siendo suficiente que en alguna parte del escrito en que se expongan, se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso

estima le causa el acto o resolución impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juzgador deba estudiarlo.

Lo anterior acontece en la especie, pues al tener a la vista el escrito de demanda, se observa que la actora sustancialmente argumentó que, en la especie, transcurrió en exceso el plazo de tres meses para que la autoridad demandada, resuelva el recurso de revocación interpuesto el **28 de marzo de 2022**, por lo que, al respecto, se ha configurado resolución en sentido negativo.

En virtud de lo anterior, y toda vez que la autoridad, al emitir la contestación de demanda, no acreditó ante esta Sala haber EMITIDO y NOTIFICADO la resolución correspondiente que en su caso hubiese resuelto el recurso de revocación interpuesto por la enjuiciante, pues por el contrario, a fin de justificar la negativa ficta, en términos del artículo 22 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la autoridad al contestar la demanda, justificó la confirmativa ficta, haciendo suyos los razonamientos expuestos en la resolución expresa contenida en el oficio número ***** de 04 de noviembre de 2022.

QUINTO. Ahora bien, debe tenerse en cuenta el Principio de Litis Abierta, que se encuentra vertido en el artículo 1º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que a la letra señala:

“ARTÍCULO 1o.- Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se regirán por las disposiciones de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea parte. A falta de disposición expresa se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que establece esta Ley.

Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo, no satisfaga el interés jurídico del recurrente, y éste la controvierta en el juicio contencioso administrativo federal, se entenderá que

~ 15 ~

simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso.

Asimismo, cuando la resolución a un recurso administrativo declare por no interpuesto o lo deseche por improcedente, siempre que la Sala Regional competente determine la procedencia del mismo, el juicio contencioso administrativo procederá en contra de la resolución objeto del recurso, pudiendo en todo caso hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso"

Y que encuentra concordancia con lo previsto en el artículo 50 del mismo Cuerpo Legal, que reza:

“ARTÍCULO 50.- Las sentencias del Tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.

Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la Sala deberá examinar primero aquéllos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en que forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución.

Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás

razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación.

Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el Tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda.

En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la hace valer la incompetencia devolución de una cantidad, el Tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, además de la ilegalidad de la resolución impugnada."

Conforme a lo dispuesto en los preceptos anteriormente transcritos, cuando la resolución recaída a un recurso administrativo no satisfaga el interés jurídico del recurrente y éste la controvierta en juicio, se entenderá que simultáneamente impugna el acto recurrido, en la parte en que continúa afectándolo, incluso si la Sala cuenta con elementos suficientes para pronunciarse sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante, debe hacerlo y no concretarse a resolver única y exclusivamente sobre la legalidad de la resolución dictada en el recurso, aun cuando la actora no controvierta los fundamentos y motivos dados por la autoridad para confirmar el acto recurrido.

En efecto, de los citados artículos se desprende que el legislador incluyó la litis abierta tratándose de las resoluciones que resolvían los recursos administrativos; asimismo, quiso evitar el reenvío de los asuntos a la autoridad administrativa, permitiendo que las Salas de este Tribunal cumplan con la garantía establecida en el artículo 17 Constitucional, esto es, con la impartición de justicia pronta, completa, imparcial y expedita, pues de lo que se trata es de evitar que el particular que obtenga una



TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

TERCERA SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE
MÉXICO.

EXPEDIENTE: 20485/22-17-03-7

ACTOR: ** ***** ** ***** ** ** *



TRABAJANDO POR MÉXICO

~ 17 ~

resolución favorable, tenga que esperar a que la autoridad que resolvió el recurso vuelva a dictar otra resolución anulando la recurrida, alargando sin justificación la solución definitiva de las controversias y suscitando nuevos conflictos con motivo de la interpretación de la sentencia que hagan las partes.

Tal afirmación encuentra sustento, por analogía, la Jurisprudencia 2a./J. 32/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Abril de 2003, página 193, cuyo texto a letra es el siguiente:

“JUICIO DE NULIDAD. EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 197, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE, PERMITE AL DEMANDANTE ESGRIMIR CONCEPTOS DE ANULACIÓN NOVEDOSOS O REITERATIVOS REFERIDOS A LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, LOS CUALES DEBERÁN SER ESTUDIADOS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. El artículo 197 del Código Fiscal de la Federación, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de diciembre de 1995, contenía el principio de "litis cerrada" que impedía que se examinaran los argumentos dirigidos a demostrar la ilegalidad del acto administrativo contra el cual se enderezó el recurso, es decir, no permitía que el demandante hiciera valer o reprodujera argumentos relativos a la resolución recurrida; y, por ende, el entonces Tribunal Fiscal de la Federación no estaba obligado a estudiar los conceptos de anulación que reiteraran argumentos ya expresados y analizados en el recurso ordinario; sin embargo, en el texto vigente del último párrafo del citado numeral se simplificó el procedimiento contencioso administrativo al cambiar el principio de "litis cerrada" por el de "litis abierta", el cual comprende no sólo la resolución impugnada sino

también la recurrida; los nuevos argumentos que pueden incluir los razonamientos que se refieran a la resolución recurrida, y los dirigidos a impugnar la nueva resolución; así como aquellas razones o motivos que reproduzcan agravios esgrimidos en el recurso administrativo en contra de la resolución originaria. Por tanto, todos estos argumentos, ya sean novedosos o reiterativos de la instancia administrativa, constituyen los conceptos de anulación propios de la demanda fiscal, lo cual implica que con ellos se combaten tanto la resolución impugnada como la recurrida en la parte que afecte el interés jurídico del actor, por lo que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa está obligado a estudiarlos.

Contradicción de tesis 171/2002-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo, ambos del Séptimo Circuito. 28 de marzo de 2003. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rolando Javier García Martínez. Tesis de jurisprudencia 32/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del cuatro de abril de dos mil tres."

De igual forma, resulta aplicable al caso el contenido de la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sección de la Sala Superior de este Tribunal, que a continuación se transcribe:

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

VI-J-2aS-6

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA CONTENIDO EN LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PERMITE AL DEMANDANTE ESGRIMIR CONCEPTOS DE ANULACIÓN NOVEDOSOS O REITERATIVOS REFERIDOS A LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, LOS CUALES DEBERÁN SER ESTUDIADOS POR EL TRIBUNAL.- Conforme a lo dispuesto en los artículos 1º, segundo párrafo, y 50, penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicada



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

TERCERA SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

EXPEDIENTE: 20485/22-17-03-7

ACTOR: ** ***** ** ***** ** ** *



TRABAJANDO POR MÉXICO

~ 19 ~

en el Diario Oficial de la Federación el 1º de diciembre de 2005, en vigor a partir del 1º de enero del 2006, en el juicio contencioso administrativo se atiende a un principio de “litis abierta”, conforme al cual, en la sentencia que dicte el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa cuando se impugne la resolución recaída a un recurso administrativo, se deben resolver, no sólo los agravios encaminados a controvertir la legalidad de la resolución impugnada, sino que además se deberán resolver los que controvertan la recurrida, debiéndose analizar los nuevos argumentos planteados, que pueden incluir los razonamientos que se refieran a la resolución recurrida, y los dirigidos a impugnar la nueva resolución; así como aquellas razones o motivos que reproduzcan agravios esgrimidos en el recurso administrativo en contra de la resolución originaria. Por tanto, todos estos argumentos, ya sean novedosos o reiterativos de la instancia administrativa, constituyen los conceptos de anulación propios de la demanda fiscal, lo cual implica que con ellos se combaten tanto la resolución impugnada como la recurrida en la parte que afecte el interés jurídico del actor, por lo que este Tribunal está obligado a estudiarlos. (9)

(Tesis de jurisprudencia aprobada por acuerdo G/S2/8/2008)

PRECEDENTES:

Así lo acordó la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la sesión privada ordinaria, celebrada el jueves dieciocho de septiembre de dos mil ocho.- Firman para constancia, la Magistrada Olga Hernández Espíndola, Presidenta de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y el Licenciado Mario Meléndez Aguilera, Secretario Adjunto de Acuerdos, quien da fe.

Por lo anterior, se debe concluir que esta Instrucción **cuenta con la facultad para resolver sobre la legalidad de los actos antecedentes al impugnado en juicio**, que, tratándose de una resolución recaída a un recurso, se traduce en la posibilidad de poder pronunciarse en cuanto al **acto originalmente recurrido**.

SEXTO. Esta Sala Juzgadora de conformidad con el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo procede al estudio de los conceptos de impugnación de su escrito inicial de demanda y ampliación de demanda en los que sustancialmente manifiesta lo siguiente:

Que la autoridad fiscal interpreta incorrectamente la mecánica del impuesto al valor agregado y los requisitos aplicables para su acreditamiento, en relación con el pago de la contraprestación y del impuesto trasladado.

Lo anterior, al señalar que el impuesto al valor agregado trasladado se debe pagar en efectivo, exclusivamente para ser acreditable, negando que los particulares extingan sus obligaciones por los medios permitidos por la Ley, como compensación. Por lo que, la autoridad pretende desprender una obligación inexistente y sin fundamento legal al señalar que el impuesto deba ser pagado en efectivo, transferencia electrónica o cheque exclusivamente, siendo que no existe ningún precepto legal que impongan dichas obligaciones.

Asimismo, señala que es falso que el impuesto al valor agregado no se encuentre efectivamente pagado, pues en realidad, tanto el monto de la contraprestación, como el impuesto trasladado fue cubierto mediante métodos de pago jurídicamente válidos, esto es, mediante una transferencia electrónica en cantidad de \$2,589.177,489 pesos, así como la compensación de la cuenta por cobrar registrada respecto de los depósitos en garantía en cantidad de \$352,250,009, con lo cual se cumple con lo establecido en el artículo 5, fracción II I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.



TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

**TERCERA SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE
MÉXICO.**

EXPEDIENTE: 20485/22-17-03-7

ACTOR: ** *** ** ***** ** *******



TRABAJANDO POR MÉXICO

~ 21 ~

Que la autoridad valora incorrectamente los hechos del caso y realiza una aplicación y atribución totalmente arbitraria de la contraprestación pactada, ello en virtud de que no tiene facultades para llevar a cabo la asignación de los métodos de pago y para llevar a cabo dicha asignación.

Que en este sentido ya sea que el impuesto se cubra en dinero, cheque, transferencia, compensación, dación en pago o cualquier método por el cual lícitamente se extingan obligaciones, es obligación del sujeto que realizó el acto o actividad gravada, considerar que la contribución se causó, y en consecuencia, determinar y enterar el impuesto que corresponda ante las autoridades fiscales, tal como se desprende de los artículos 1 y 1-B de la ley del Impuesto al Valor Agregado.

Por lo que, es irrelevante si la contraprestación y el impuesto se cubrieron en efectivo o mediante otros medios, pues en todo caso la contribución se causó y el sujeto pasivo respectivo queda vinculado a enterarla ante el Fisco Federal de acuerdo con la mecánica prevista para tal efecto, por lo que, procede decretar la nulidad lisa y llana la resolución recurrida.

Que la autoridad fiscal interpreta incorrectamente los hechos y requisitos aplicables para el acreditamiento del impuesto al valor agregado manifestando que no fue declarado ni enterado al erario fiscal, existiendo así, una confusión de dos conceptos fundamentales del impuesto al valor agregado, que son el impuesto causado y el impuesto trasladado.

Derivado de dicha confusión, parece que la autoridad manifiesta que, toda vez que en su criterio el impuesto al valor agregado trasladado no fue efectivamente pagado (ya que fue objeto de compensación según la propia autoridad), debe entenderse que no fue

declarado y enterado al "erario federal", sin embargo, el efectivo pago de la contraprestación y el impuesto trasladado, conlleva a la causación del mismo, lo cual detona el derecho del acreditamiento del impuesto al valor agregado por la persona que lo causa.

Que, conforme a la mecánica del impuesto al valor agregado, puede que el contribuyente considere causado el impuesto que trasladó a sus clientes, pero que al restar el impuesto acreditable no se genere una diferencia que deba enterar al erario, sino una cantidad a su favor.

Que en ese sentido no existe ningún precepto legal que establezca que el acreditamiento se encuentra condicionando al pago del impuesto causado por el sujeto pasivo de la contribución.

Que suponiendo sin conceder que la contraprestación no fuera un medio válido de extinción de las obligaciones para efectos de considerar como efectivamente pagado el impuesto trasladado, sigue siendo procedente que se revoque la resolución impugnada, toda vez que la autoridad hace una asignación ilegal y arbitraria del pago realizado por transferencia electrónica, por así convenir a sus propios intereses.

Lo anterior, pues en cumplimiento al contrato de compraventa de las aeronaves, la hoy actora hizo un pago mediante transferencia electrónica de \$*****\$, monto que resultaba más que suficiente para cubrir vía flujo de efectivo el impuesto al valor agregado trasladado en cantidad de \$*****\$

Que, para la autoridad el valor de mercado de las dos aeronaves señaladas en la resolución recurrida, no es aquel que efectivamente y en realidad pagó el comprador a un vendedor que tienen la característica de ser terceros independientes, sino un valor determinado en un avalúo no vinculatorio, por un tercero que no es autoridad y que únicamente se realizó con el objetivo de ratificar el valor de cada una de las aeronaves adquiridas por la hoy actora, de conformidad con la



TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

TERCERA SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE
MÉXICO.

EXPEDIENTE: 20485/22-17-03-7

ACTOR: ** ***** ** ***** ** ** *



~ 23 ~

Codificación 805 de las Normas Contables del Consejo de Normas de Contabilidad Financiera.

Por lo que, contrario a lo manifestado por la autoridad, el precio de mercado de las dos aeronaves señaladas en la resolución recurrida es precisamente el pactado por la recurrente con el vendedor y no el valor determinado por ***** ** en el avalúo emitido el 2 de agosto de 2016.

Que, no existe fundamento legal que permita concluir que, en las operaciones celebradas por terceros independientes, el "precio de mercado" es aquel que se determina en un avalúo, no obstante, la autoridad concluye que el "precio de mercado" de las dos aeronaves de mérito no es el pactado y pagado por la recurrente al vendedor, sino el valor determinado por ***** ** en el avalúo emitido el 2 de agosto de 2016, por lo que, en el caso se viola el contenido de los artículos 5, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en relación con el artículo 27, fracción XIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Por su parte, la **autoridad demandada**, al momento de contestar la demanda, ratificado en su ocurso de alegatos, sostuvo la legalidad y validez de la resolución impugnada y recurrida, en los términos en que fueron emitidas.

A juicio de este Órgano Colegiado, los conceptos de impugnación sujetos a análisis devienen de parcialmente **fundados y por ende suficientes** para declarar la nulidad de la resolución impugnada y recurrida en los puntos de controversia, en atención a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho:

En estricto cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de doce de agosto de dos mil veinticinco emitida por el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el D.A. 730/2023, se sigue de la manera siguiente:

Del análisis practicado a la resolución recurrida con número de oficio *****, de 10 de febrero de 2022, que tiene pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se desprende que en la parte que interesa respecto de la cual reclama su ilegalidad la parte actora, la autoridad resolvió lo siguiente:

- Respecto a la cantidad de \$*****, la autoridad observó:
 - Que la hoy actora pretendía utilizar como pago la figura de compensación de deudas con su proveedor *****

*****. tanto para la contraprestación como para el impuesto al valor agregado acreditable, el importe compensado en cantidad de \$*****
***** * \$***** pesos fue aplicado al total de la contraprestación, incluyendo al impuesto al valor agregado en la cantidad de \$*****
 - El impuesto al valor agregado no fue pagado mediante flujo de efectivo (no la contraprestación o precio de los bienes sino el impuesto correspondiente), por lo que la compensación de deudas que utilizó la recurrente no puede considerarse como medio de pago ni de cumplimiento de obligaciones fiscales, por lo que no demuestra que el impuesto el valor agregado que se le trasladó a la contribuyente se encuentre efectivamente pagado en el mes de enero de 2016.



TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

TERCERA SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE
MÉXICO.

EXPEDIENTE: 20485/22-17-03-7

ACTOR: ** ***** ** ***** ***** ** *****



TRABAJANDO POR MÉXICO

~ 25 ~

- Que la cantidad de \$***** no reúne el requisito del acreditamiento consistente en estar efectivamente pagado en el mes de que se trate, por los depósitos de seguridad, toda vez que del total de Impuesto al valor agregado de la operación de la adquisición de las ** ***** en cantidad de \$***** , se logra identificar el impuesto al valor agregado pagado mediante transferencia bancaria de 28 de enero de 2016 en cantidad de \$***** e impuesto al valor agregado pagado mediante compensación de depósitos en garantía en cantidad de \$***** , el cual no se encuentra efectivamente pagado en virtud de que hay dos partes en la operación: 1) contraprestación y 2) impuesto al valor agregado, la contraprestación puede pagarse mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones conforme al artículo 1-B de la Ley del Impuesto el Valor Agregado vigente en enero 2016, sin embargo el pago de la contraprestación no incluye el impuesto al valor agregado por tanto se observa que el impuesto al valor agregado fue pagado mediante dos formas de pago transferencia y compensación, por lo que la compensación que utilizó la contribuyente, no puede considerarse como medio de pago del impuesto al valor agregado, por lo que, dicha cantidad no cumple con los requisitos fiscales necesarios para considerar su acreditamiento al no reunir el requisito de que el impuesto al valor agregado trasladado haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate.

- Respecto de la cantidad de \$***** , la autoridad determinó:
 - Es improcedente el impuesto al valor agregado acreditable que pretende acreditar en cantidad de \$***** toda vez que no cumple con el requisito de acreditamiento establecido en la fracción I del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2016, es decir, que no resulta estrictamente indispensable toda vez que proviene de erogaciones realizadas por la contribuyente que no son deducibles para efectos del impuesto sobre la renta en la parte del excedente el precio de mercado, ya que incumplió con el requisito de deducibilidad consistente en que en el costo de adquisición correspondan a los de mercado, cuando excedan del precio de mercado no será Deducible el excedente.

Tomando en consideración lo antes relatado resulta evidente que el presente asunto se ciñe a dilucidar la controversia sobre dos cuestiones medulares las cuales a saber son:

Establecer si respecto a la cantidad de \$***** que pretende acreditar la hoy actora cumple o no con el requisito de estar efectivamente pagado de conformidad con el artículo 5, fracción III de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en 2016; así como respecto de la cantidad de \$***** que pretende acreditar la hoy actora es si cumple o no con el requisito de ser estrictamente indispensable de conformidad con el artículo 5, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Por lo que esta Sala asume el estudio de dichas problemáticas, precisando que se procede al estricto cumplimiento de la ejecutoria emitida por el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia

~ 27 ~

Administrativa del Primer Circuito en el D.A. 730/2023, al que fue conminado esta Sala.

Precisado lo anterior, resulta conveniente imponerse del contenido de los artículos 1-B y 5, fracción III, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigentes, los cuales disponen:

"**ARTICULO I.-B.-** Para los efectos de esta Ley se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquéllas correspondan a anticipos, depósitos o a cualquier otro concepto sin importar el nombre con el que se les designe, o bien, cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones.

Cuando el precio o contraprestación pactados por la enajenación de bienes, la prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes se pague mediante cheque, se considera que el valor de la operación, así como el impuesto al valor agregado trasladado correspondiente, fueron efectivamente pagados en la fecha de cobro del mismo o cuando los contribuyentes transmitan los cheques a un tercero, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración.

Se presume que los títulos de crédito distintos al cheque suscritos a favor de los contribuyentes, por quien adquiere el bien, recibe el servicio o usa o goza temporalmente el• bien, constituye una garantía del pago del precio o la contraprestación pactados, así como del impuesto al valor agregado correspondiente a la operación de que se trate.

En estos casos se entenderán recibidos ambos conceptos por los contribuyentes cuando efectivamente los cobren, o cuando los contribuyentes transmitan a un tercero los documentos pendientes de cobro, excepto cuando dicha transmisión sea en procuración.

Cuando con motivo de la enajenación de bienes, la prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, los contribuyentes reciban documentos o vales, respecto de los cuales un tercero asuma la obligación de pago o reciban el pago mediante tarjetas electrónicas o cualquier otro medio que permita al usuario obtener bienes o servicios, se considerará que el valor de las actividades respectivas, así como el impuesto al valor agregado correspondiente, fueron efectivamente pagados en la fecha en la que dichos documentos, vales, tarjetas electrónicas o cualquier otro medio sean recibidos o aceptadas por los contribuyentes."

"ARTICULO 5o.- Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deberán reunirse los siguientes requisitos:

(...)

III. Que el impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate;

(..)

Del artículo 1-B, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se desprende esencialmente, que al referir que se consideran efectivamente cobradas las contraprestaciones cuando se reciban en efectivo, en bienes o en servicios, aun cuando aquéllas correspondan a anticipos, depósitos o a cualquier otro concepto, sin importar el nombre con el que se les designe, o bien, cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones que den lugar a las contraprestaciones, no se prevé que el impuesto al valor agregado pueda ser cubierto mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones, porque únicamente se hace referencia a las contraprestaciones, es decir, lo

~ 29 ~

que se recibe a cambio de la enajenación de bienes, la prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.

De esta manera, se tiene que en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no se regulan las formas de extinción de las obligaciones, siendo que tales formas se regulan en el Título Quinto del Código Civil Federal; concretamente, en el artículo 2185¹ de dicha legislación, se regula la compensación, como forma de extinción de las obligaciones, misma que tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho, extinguen las dos deudas, hasta la cantidad que impone la menor.

No obstante a ello, debe precisarse por parte de esta Juzgadora que la aplicación del derecho federal común en las leyes fiscales, no es irrestricta, pues en todos los casos debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 5º, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, en el cual se establece que a falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común, cuando su aplicación no sea con la naturaleza del derecho fiscal, tal como se advierte de la siguiente transcripción:

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

"Artículo 5o.- Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta.

Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Las otras

¹ Artículo 2185.- Tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho.

disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal."

Establecido lo anterior se procede a dar atención al arábigo 1 de la ejecutoria emitida por el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el D.A.730/2023, en el cual se ordenó verificar y atender lo esbozado por el accionante respecto de **"Si el Impuesto al Valor Agregado trasladado en cantidad de \$***~*******

*********, **fue cubierto mediante transferencia bancaria (efectivo) o bien, mediante compensación, con base en los hechos y pruebas aportadas en el expediente"** en el mismo sentido por cuestión de método de estudio se atenderán las consideraciones marcadas con los arábigos 2 **"Si la autoridad fiscalizadora cuenta con facultades previstas expresamente por la ley, que le permitan atribuir a que parte de la contraprestación y el Impuesto al Valor Agregado fue aplicada la compensación"** y 3 **"Si la vendedora de las *******

********* **enteró al Servicio de Administración Tributaria el Impuesto al Valor Agregado que le traslado."**; en concordancia con lo establecido en la aludida ejecutoria respecto de la valoración de las pruebas señaladas con las letras A **"La Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales normal y Complementaria de ** *******

********* **correspondiente al mes de enero de dos mil dieciséis, en la que se determinó un Impuesto al Valor Agregado a cargo en cantidad de \$***~*******

********* **"El comprobante de pago del Impuesto al Valor Agregado determinado a cargo de ** *******
********* **correspondiente al mes de enero de dos mil dieciséis, con el que afirma se demuestra que el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, el vendedor de**

~ 31 ~

la flotilla de las aeronaves, enteró antes las autoridades fiscales el Impuesto al Valor Agregado trasladado con motivo de la enajenación referida”; C “Papel de trabajo que contiene la determinación del Impuesto al Valor Agregado a cargo ** ** ** correspondiente al mes de enero de dos mil dieciséis”; D “Las documentales consistentes en el papel de trabajo y registros contables de ** ** ** referidas, en favor de la parte quejosa” en el mismo sentido se procederá a la valoración y análisis de la prueba pericial en materia de contabilidad.

Tomando en consideración el argumento del actor en el sentido que la resolución impugnada, así como la originalmente recurrida se encuentran indebidamente fundadas y motivadas respecto a las determinaciones adoptadas por la autoridad, lo conducente resulta ser, el establecer que debe de entenderse por fundamentación y motivación:

En primer lugar, debemos referirnos al artículo 16 Constitucional el cual establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, de la manera siguiente:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

En este sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado en qué consisten los requisitos de fundamentación y motivación, en la jurisprudencia 73, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, Séptima Época, Tomo III, parte SCJN, página 52, que es del tenor siguiente:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."

Así, la falta de fundamentación y motivación, se actualiza cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica.

Bajo los criterios sostenidos por el Poder Judicial de la Federación debe entenderse que la debida fundamentación y motivación de los actos de autoridad se actualiza exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante, invocando un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa.

Ahora bien, a efecto de discernir las cuestiones efectivamente planteadas por la actora, es necesario conocer en primer orden, qué se



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

TERCERA SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE
MÉXICO.

EXPEDIENTE: 20485/22-17-03-7

ACTOR: ** ***** ** ***** ** *



TRABAJANDO POR MÉXICO

~ 33 ~

entiende **por debida fundamentación de un acto de autoridad**, situación que ha sido analizada en varios criterios jurisprudenciales emitidos por el Poder Judicial de la Federación, mismos que establecen textualmente lo siguiente:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que también deben señalarse con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Esto es, que cuando el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades o derechos sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, está exigiendo a todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que ley se trata y los preceptos de ella que sirvan de apoyo al mandamiento relativo. En materia administrativa, específicamente, para poder considerar un acto autoritario como correctamente fundado, es necesario que en él se citen: a).- Los cuerpos legales y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado para que esté obligado al pago, que serán señalados con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos aplicables, y b).- Los cuerpos legales, y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto en agravio del gobernado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Jurisprudencia; 8ª. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; 64, Abril de 1993;
Pág. 43

De los criterios jurisprudenciales transcritos, se advierte que los requisitos indispensables para concluir que un acto administrativo se encuentra debidamente fundado, son:

- 1-** Citar los supuestos normativos en que se encuadra la conducta del gobernado.
- 2-** Deberán ser señalados con exactitud, es decir, precisándose los incisos, subincisos y fracciones,
- 3-** Señalar los cuerpos legales y preceptos que otorgan competencia o facultades a las autoridades para emitir el acto,
- 4-** Que se configure la hipótesis normativa.

Es decir, la debida fundamentación de un acto de autoridad obedece al hecho de que la autoridad exprese en el cuerpo del mismo, lo necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa del gobernado, exponiendo los hechos relevantes de la autoridad, siendo indispensable citar el precepto legal y/o reglamentario que a su juicio se actualizó.

Así, la fundamentación consiste en la cita de los preceptos en que se apoyan las conclusiones de la autoridad.

Por otra parte, y respecto de los motivos o circunstancias que originaron la decisión adoptada; entendiéndose que se estima cumplido el requisito que exige el artículo 16 constitucional, cuando la autoridad exprese con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para la emisión del acto, se

~ 35 ~

estima, siendo para ello suficiente que el razonamiento substancial que al efecto se produzca quede claro.

Sirven de apoyo a lo anterior, las siguientes tesis del Poder Judicial de la Federación, cuyos datos de ubicación, rubro y contenido son los siguientes:

“Época: Octava Época

Registro: 224808

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990

Materia(s): Administrativa, Común

Tesis: VI. 2o. J/63-2

Página: 372

MOTIVACION. Cuando en una resolución de la autoridad administrativa se expresan con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se tuvieron en consideración para la emisión del acto, se estima cumplido el requisito que exige el artículo 16 constitucional, siendo para ello suficiente que el razonamiento substancial que al efecto se produzca quede claro. Por ende, sólo la omisión total de motivación o que, la que se exprese, sea tan imprecisa que no de elementos al afectado para defender sus derechos o para impugnar el razonamiento aducido por la autoridad responsable, puede motivar la concesión del amparo por la falta de dicho requisito; pero no cuando el afectado reconozca la esencia de los argumentos legales y las consideraciones en que se apoyó la responsable, pues en tal hipótesis está en aptitud de alegar y defenderse en contra de lo considerado por la autoridad.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 443/87. Equipo Marino e Industrial El Faro, S. A de C. V. 1o. marzo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.
Amparo directo 78/90. Evelia Muñoz Acevedo. 22 de marzo de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.

“Época: Octava Época

Registro: 213531

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo XIII, Febrero de 1994

Materia(s): Común

Tesis: II.2o.181 K

Página: 357

MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. La motivación exigida por el artículo 16 constitucional consiste en el razonamiento, contenido en el texto del acto autoritario conforme al cual quien lo emite llega a la conclusión de que el caso concreto se ajusta a las prevenciones legales que le sirven de fundamento.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 926/93. Gigante, S.A. de C.V. y coags. 23 de noviembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Pablo Rabanal Arroyo.

En este sentido lo conducente resulta ser verificar si efectivamente la hoy enjuiciada al momento de emitir la resolución impugnada consistente en resolución **NEGATIVA FICTA** recaída al escrito presentado el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, ante la **ADMINISTRACIÓN DESCONCENTRADA JURÍDICA DEL DISTRITO FEDERAL “1” DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**, por medio del cual, interpuso recurso de revocación en contra del oficio número ***** de diez de febrero del año en curso, emitida por la **ADMINISTRACIÓN**

~ 37 ~

DESCONCENTRADA DE AUDITORÍA FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL “1” DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, por medio del cual, se le autorizó parcialmente la devolución por concepto de saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al mes de Enero de 2016, fundó y motivó debidamente la misma.

Sentado lo anterior, es importante tener presente la parte relativa de la resolución impugnada en la cual la autoridad enjuiciada plasmó su fundamentación y la manera en que motivo su acto para determinar que el monto de \$***** * **** * ***** *****
***** * **** * ***** ***** ***** *****), no se encuentra efectivamente pagado ya que fue cubierto mediante compensación.

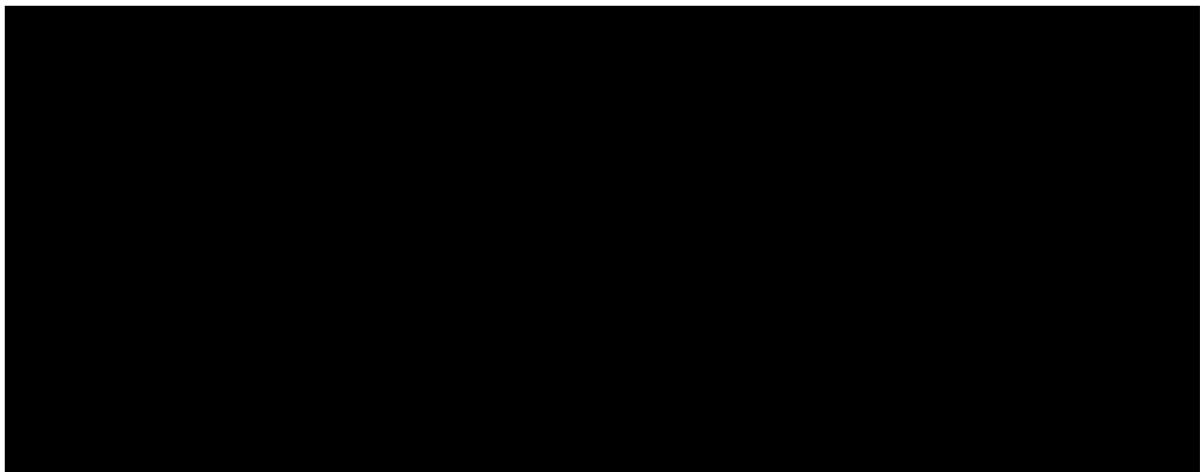
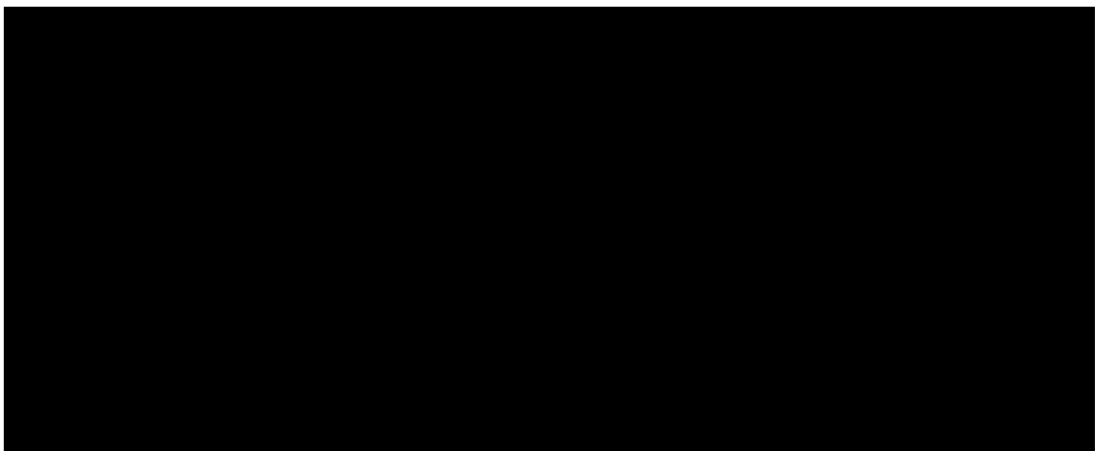
De entrada, debemos decir que la autoridad señala en el apartado denominado “1.B IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE PROVENIENTE DE OPERACIONES REALIZADAS CON SU PROVEEDOR *****
***** ** * **** * ***** ***** ***** ***** ***** *****” de la resolución originalmente recurrida que del análisis realizado a la documentación comprobatoria exhibida y proporcionada por la contribuyente ** ***** **
***** * ** * ** **, al inicio y en el transcurso de las facultades de comprobación por el periodo fiscal comprendido del 01 de enero de 2016 al 31 de enero de 2016 consistentes en:

● ***** ***** ** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ** ***** ***** ***** ***** *****
***** ** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
** ** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

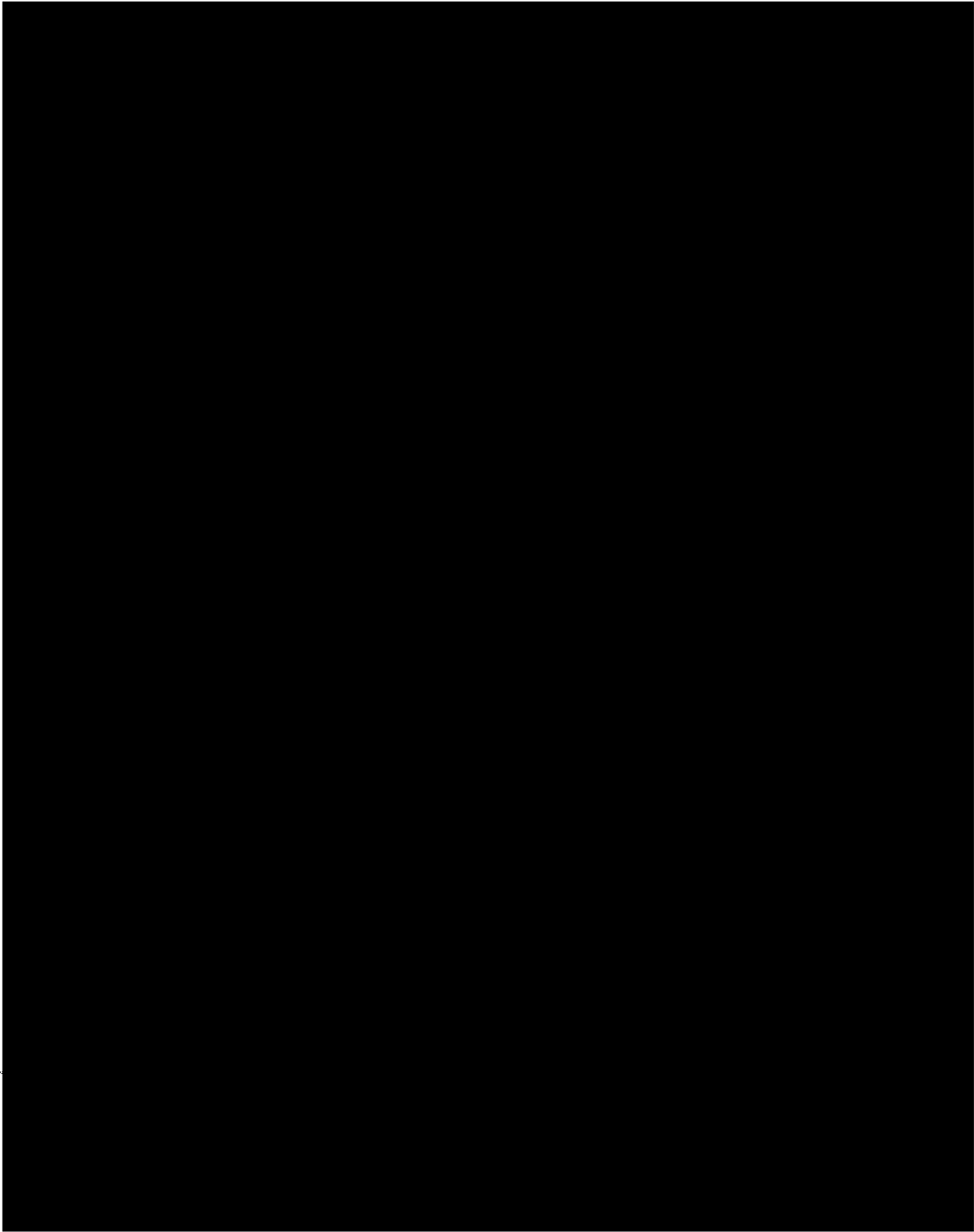
[illegible]

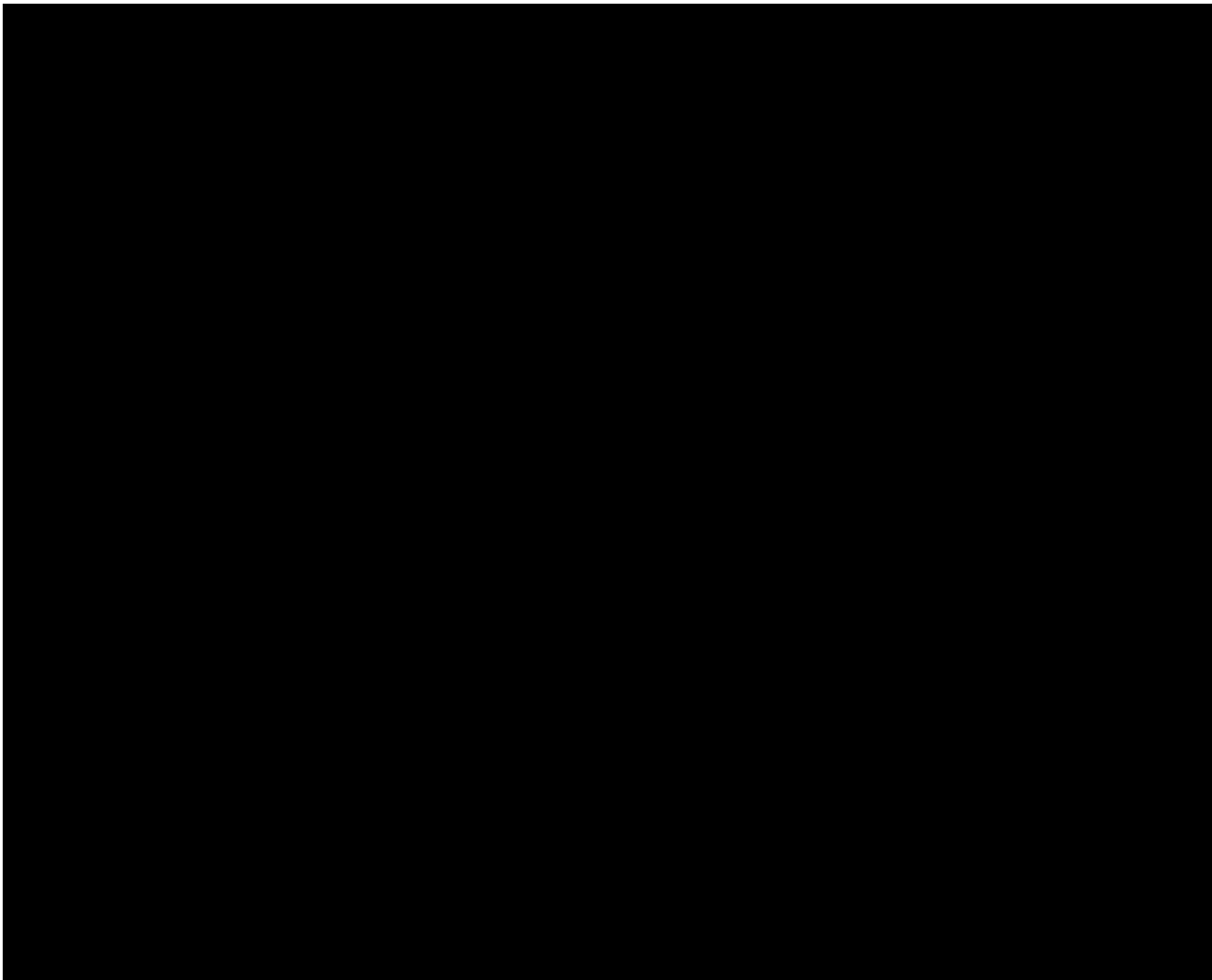


En el mismo sentido la autoridad estableció que la forma de pago de la suma total de la operación se llevó a cabo de la siguiente forma:



Sobre la misma línea de análisis la autoridad demandada establece que por lo que hace al Impuesto al Valor Agregado acreditable que no se encuentra efectivamente pagado, mediante la última acta parcial se dieron a conocer los siguientes hechos u omisiones.





De lo anterior se logra advertir que la autoridad demandada establece que del análisis practicado a la documentación comprobatoria exhibida por el hoy actor advierte lo siguiente:

- 1. Que existe una transferencia bancaria realizada el 28 de enero de 2016, por la cantidad de \$***'***** dólares los cuales son equivalentes a \$*****'***** pesos, con destino a la cuenta bancaria ***** *****
*** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** * ***** ** ** ***** ***** ***** * ** * * *
- 2. La existencia de un monto de \$19,069,919.00 dólares los cuales son equivalentes a \$352'250,008.81 pesos y que este monto fue compensado sobre el total de la contraprestación el cual incluye Impuesto al Valor Agregado, por lo cual concluye que el Impuesto al Valor Agregado que fue pagado mediante



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

TERCERA SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE
MÉXICO.

EXPEDIENTE: 20485/22-17-03-7

ACTOR: ** ***** ** ***** ** ** *



~ 43 ~

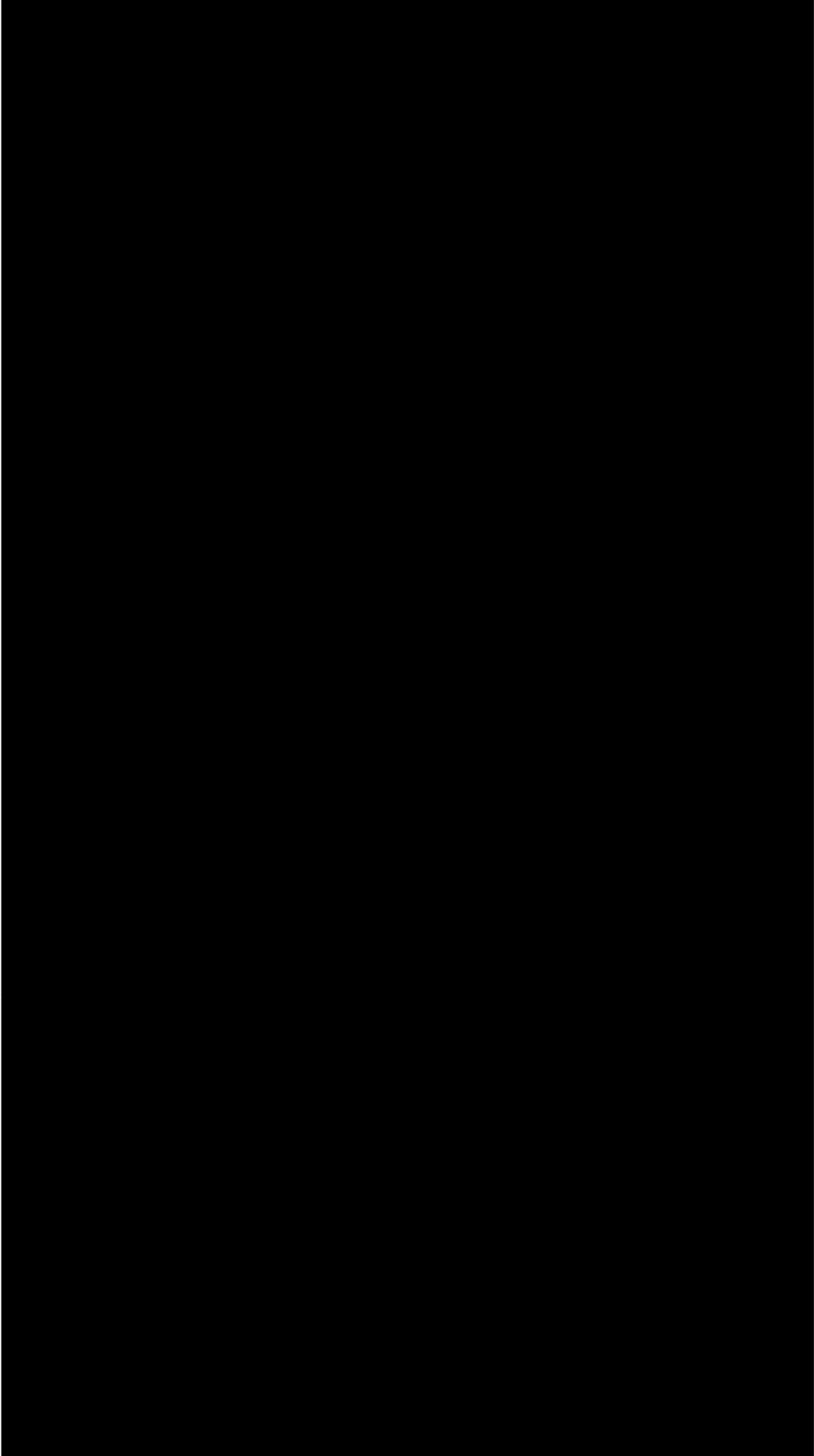
compensación resulta en la cantidad de \$**'***** pesos los cuales corresponden a los contratos de depósito en garantía.

3. Que se conoció que las partes intervinientes en la operación en vez de realizar las transferencias bancarias correspondientes, es decir, transferir la cantidad de \$***** dólares equivalentes a \$**'***** pesos, estos pactaron compensar el monto total de los depósitos de seguridad contra el porcentaje que resultara del total de la compraventa de las aeronaves y el remanente que resultara se pagaría vía transferencia bancaria.

En el mismo sentido la autoridad continua argumentando que la cantidad de \$**'***** pesos cantidad que forma parte del Impuesto al Valor Agregado acreditable declarado y del saldo a favor solicitado en devolución por la impetrante en el presente juicio no fue pagado a través de cuentas bancarias propias a nombre de la contribuyente, ya que la hoy ocurrente utilizó la figura de compensación de deudas, la cual no puede considerarse como un medio de pago ni de cumplimiento de obligaciones fiscales, y que por tanto no se aprecia que se haya pagado el Impuesto al Valor Agregado mediante flujo de capital, lo cual lleva a determinar que el Impuesto al Valor Agregado que se le traslado no se encuentra efectivamente pagado en el mes de enero de 2016.

Al respecto se advierte de la resolución originalmente recurrida que el hoy actor mediante escrito libre de 07 de enero de 2022, presentado ante la autoridad por medio de su representante legal hizo valer las siguientes manifestaciones a fin de desvirtuar la aseveración de la

autoridad respecto de que el Impuesto al Valor Agregado fue pagado mediante compensación.





TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

TERCERA SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE
MÉXICO.

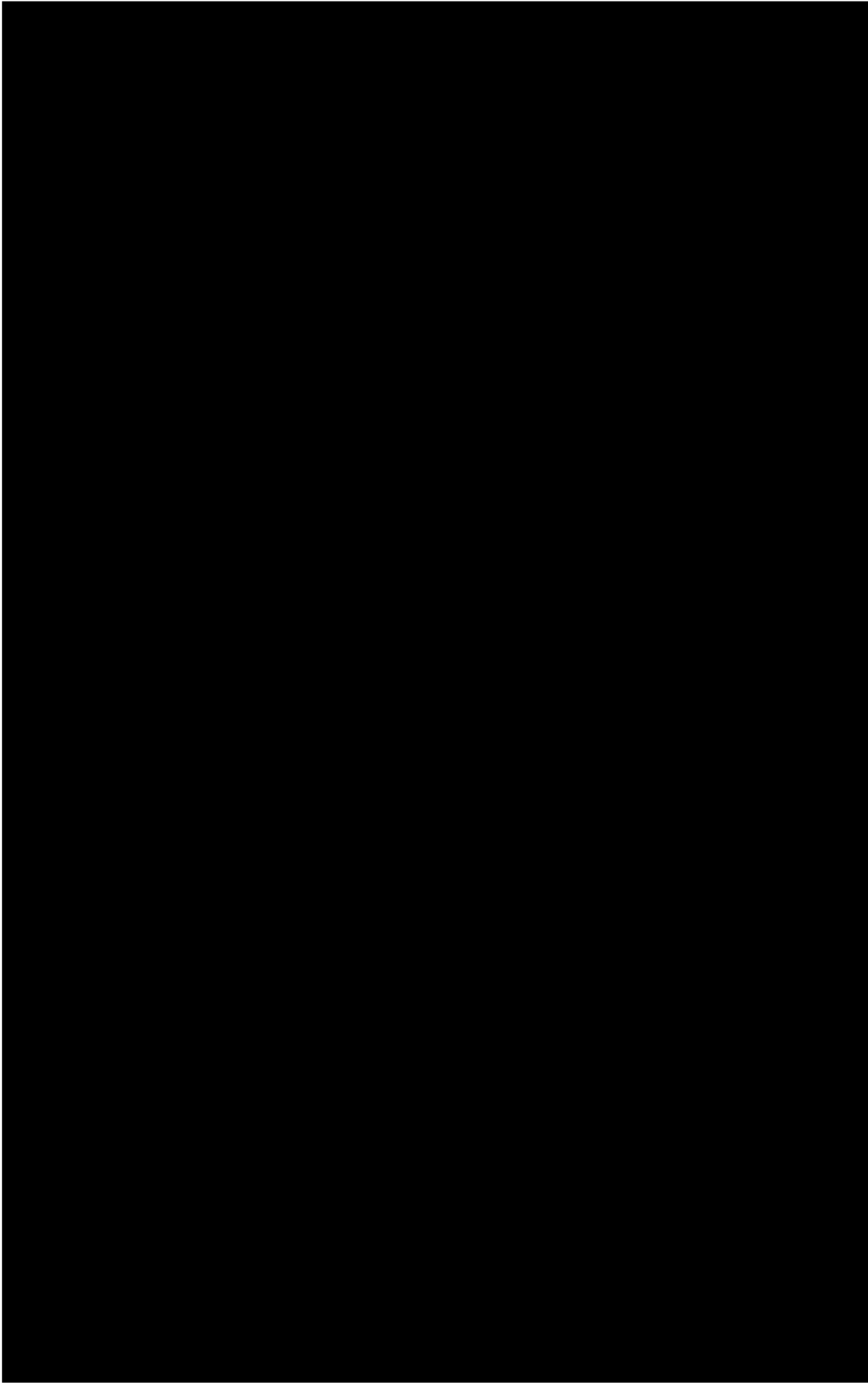
EXPEDIENTE: 20485/22-17-03-7

ACTOR: ** ***** ** ***** ** *



TRABAJANDO POR MÉXICO

~ 45 ~



De lo anterior se desprende que el accionante manifiesta en síntesis que en términos del Segundo Convenio Modificatorio, con la finalidad de facilitar la transmisión de los activos, se estableció como una obligación del ***** la de capitalizar -fondear- a las entidades mexicanas que servirían de vehículos (VPE) para la compra del negocio (incluida mi mandante), mediante capital y deuda, **en un monto equivalente a el precio de compra más IVA, menos el monto total de depósitos en garantía pagados por los clientes al inicio de los contratos de arrendamiento (también conocidos como depósitos de seguridad), pues éstos correspondían a los contratos de arrendamiento que, junto con las aeronaves, serían transmitidos al Grupo Global Jet.**

Es decir, el actor afirma que la compensación se llevo de conformidad con el artículo 2185² del Código Civil Federal, esto en razón de que ambas partes contratantes tenían el carácter de acreedores y deudores, por lo que para evitar el traslado de recursos de manera innecesaria se convino compensar sobre la suerte principal de la operación (contraprestación) el monto de los depósitos de ***** \$***** *****

\$***** *****

Lo anterior lo resume en la siguiente tabla:

² Artículo 2185.- Tiene lugar la compensación cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho.



TEJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

TERCERA SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE
MÉXICO.

EXPEDIENTE: 20485/22-17-03-7

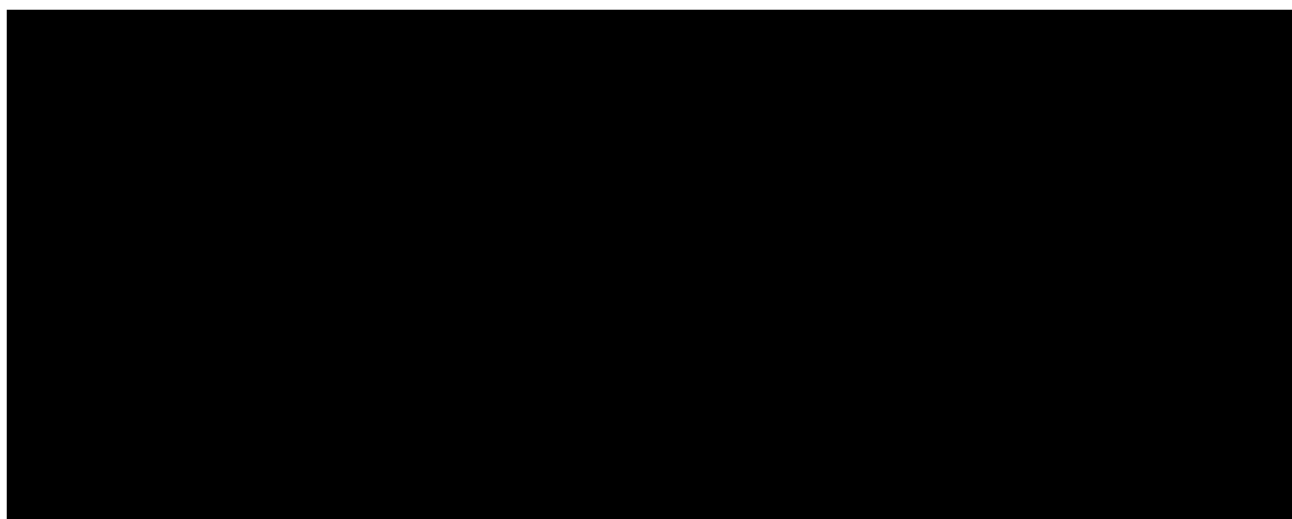
ACTOR: ** ***** ** ***** ** *



TRABAJANDO POR MÉXICO

~ 47 ~

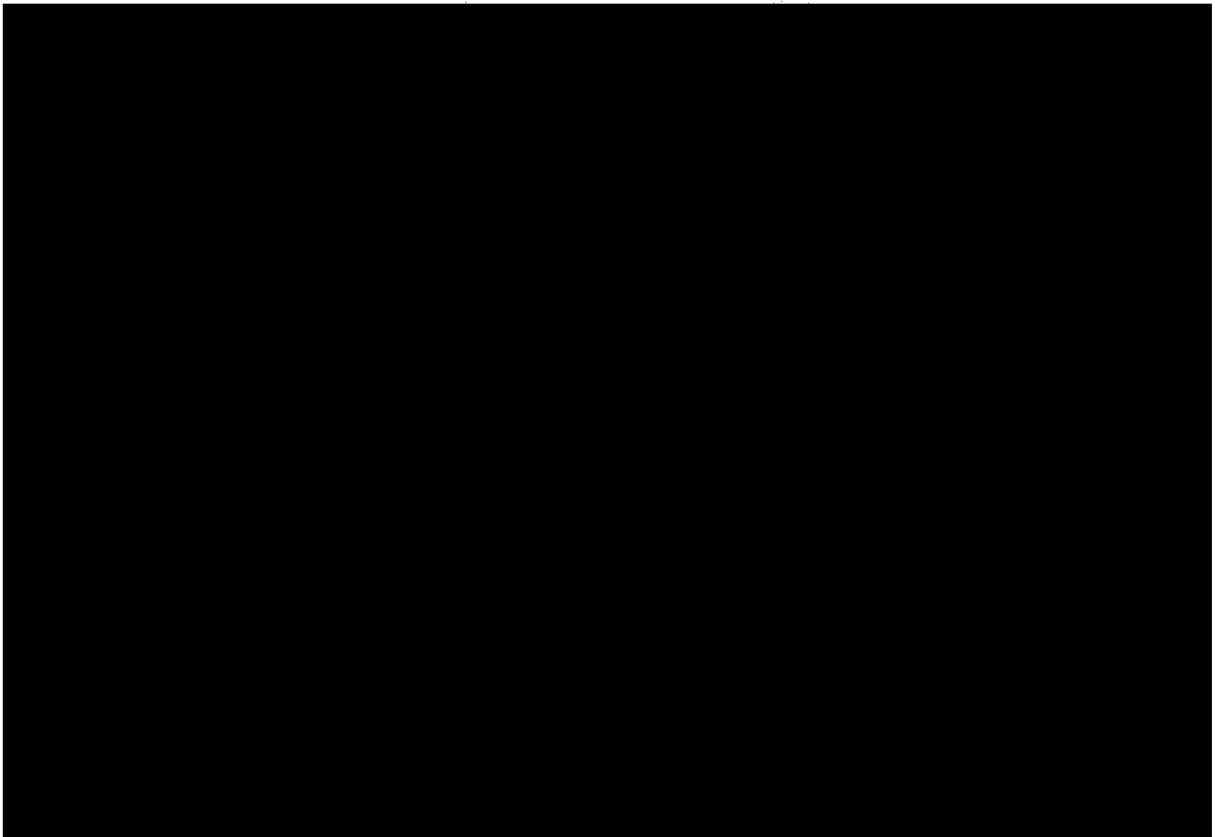
Al respecto la demandada, llevó a cabo la valoración de dichos argumentos los cuales a su juicio no resultaron suficientes para destruir su presunción, esto en virtud de que tal y como lo refiere en la resolución al estudiar los depósitos en garantía señala que de las clausulas 1.1 y 1.4 de los contratos de depósito en garantía se estableció lo que sigue:



Sobre esta temática, precisó la autoridad que, una vez llevado a cabo su análisis se advierte que no fue establecido que concepto se pagaría mediante compensación, es decir si sería para cubrir el Impuesto al Valor Agregado o la contraprestación, sin aportar mayores elementos para aplicarse a la contraprestación o al Impuesto al Valor Agregado, por lo que al no establecer la aplicación, se tienen la Compensación por depósito de seguridad en cantidad de \$****'***** como "forma de pago" para el pago del portafolio de aeronaves tanto del precio de venta y del Impuesto al Valor Agregado, situación que a juicio de esta Resolutora resulta completamente ilegal y contradictorio.

Se dice lo anterior en virtud que la autoridad precisa que de las cláusulas 1.1 y 1.4 de los contratos de depósito en garantía, no se advierte que concepto se pagaría mediante compensación, es decir si sería para cubrir el Impuesto al Valor Agregado o la contraprestación, lo cual es erróneo ya que los contratos de depósito en garantía no fueron celebrados

en la misma data que la operación que ocupa a la presente controversia, es decir, la enajenación de las 22 aeronaves, esto se verifica con datos asentados por la propia autoridad en la resolución que se combate ya que fue ella la que elaboro una tabla en la que se describe la fecha de celebración de los contratos de depósito en garantía, tabla esta que es visible y consultable a foja 26 de la resolución originalmente recurrida, la cual es del contenido siguiente:



De la tabla anterior se desprende que sin lugar a dudas la autoridad de manera por demás ilegal establece que de las clausulas de los contratos de depósito en garantía no se advierte que concepto se pagaría mediante compensación, es decir si sería para cubrir el Impuesto al Valor Agregado o la contraprestación, lo cual resulta del todo equivocado.

Se establece lo previo ya que de la simple fecha de celebración del contrato que en el caso específico plasmado por la autoridad las cláusulas insertas corresponden al "Convenio de depósito en garantía" celebrado por un lado por ** ***** ** ***** * * * * * ** *
**** * * ***** ***** ***** **** * * *. fue celebrado el 18 de febrero de 2004, es decir, una fecha por mucho anterior a la celebración de la operación que genero la contraprestación en cantidad total de



~ 49 ~

\$*****'***** pesos y causo un Impuesto al Valor Agregado en cantidad de \$****'***** ***** , ya que tal operación se llevo a cabo en el año de 2015 tal y como la propia enjuiciada lo reconoce, por lo tanto resulta evidente que la autoridad no puede basar su determinación en el hecho de que en los contratos de depósitos en garantía no se estableció lo relativo a que concepto se pagaría mediante compensación, es decir si sería para cubrir el Impuesto al Valor Agregado o la contraprestación.

En relación con lo anterior se tiene que la demandada para finalizar su estudio respecto de los argumentos esgrimidos por el accionante establece que existe una única transferencia bancaria con fecha 28 de enero de 2016, por la cantidad de \$*****
*, equivalentes a \$*****
*, y que tomando en consideración que el total del Impuesto al Valor Agregado de la operación es el resultante en cantidad de \$*****, por lo que **se logra identificar** que el Impuesto al Valor Agregado pagado mediante la transferencia bancaria de fecha 28 de enero de 2016 en cantidad de \$***** e Impuesto al Valor Agregado pagado mediante compensación de Depósitos en garantía en cantidad de \$*****, lo cual resume y ejemplifica en la siguiente tabla:

Atentos a lo anterior esta Juzgadora considera pertinente entrar al análisis de lo planteado por el impetrante, así como acatar lo ordenado por el Ad Quem, en lo relativo al análisis de los planteamientos y valoración de material probatorio respectivo.

\$*****

de la contraprestación y otro al pago del Impuesto al Valor Agregado, esto sin apoyar su determinación en algún numeral que le otorgue de manera expresa dicha facultad ya que se limita a establecer que **se logra identificar** que el Impuesto al Valor Agregado pagado mediante la transferencia bancaria de fecha 28 de enero de 2016 es la cantidad de \$***** e Impuesto al Valor Agregado pagado mediante compensación de Depósitos en garantía es la consistente en \$*****, esto sin establecer mayor explicación o fundamentar dicho actuar en una norma positiva lo

~ 51 ~

cual da como resultado que se le deje al contribuyente en un franco estado de indefensión.[se atiende el número 2 de la ejecutoria que se cumplimenta]

Ahora bien, se procede a el estudio y resolución de lo ordenado por el Tribunal de Alzada, consistente en establecer “Si el *Impuesto al Valor Agregado en cantidad* ** \$ ****, fue cubierto mediante transferencia bancaria (efectivo) o bien, mediante compensación, con base en los hechos y pruebas aportadas en el expediente”.

De entrada, se debe de señalar que en cumplimiento a lo ordenado por el Ad Quem, en la ejecutoria de mérito, se procede al estudio y valoración de las documentales consistentes en:

- A “*La Declaración Provisional o Definitiva de Impuestos Federales normal y Complementaria de* ** ****

**** *

**** *

**** *

**** *

**** *

**** *

**** *

**** *
- B “*El comprobante de pago del Impuesto al Valor Agregado determinado a cargo de* ** ****

**** *

**** *

**** *

*****”.

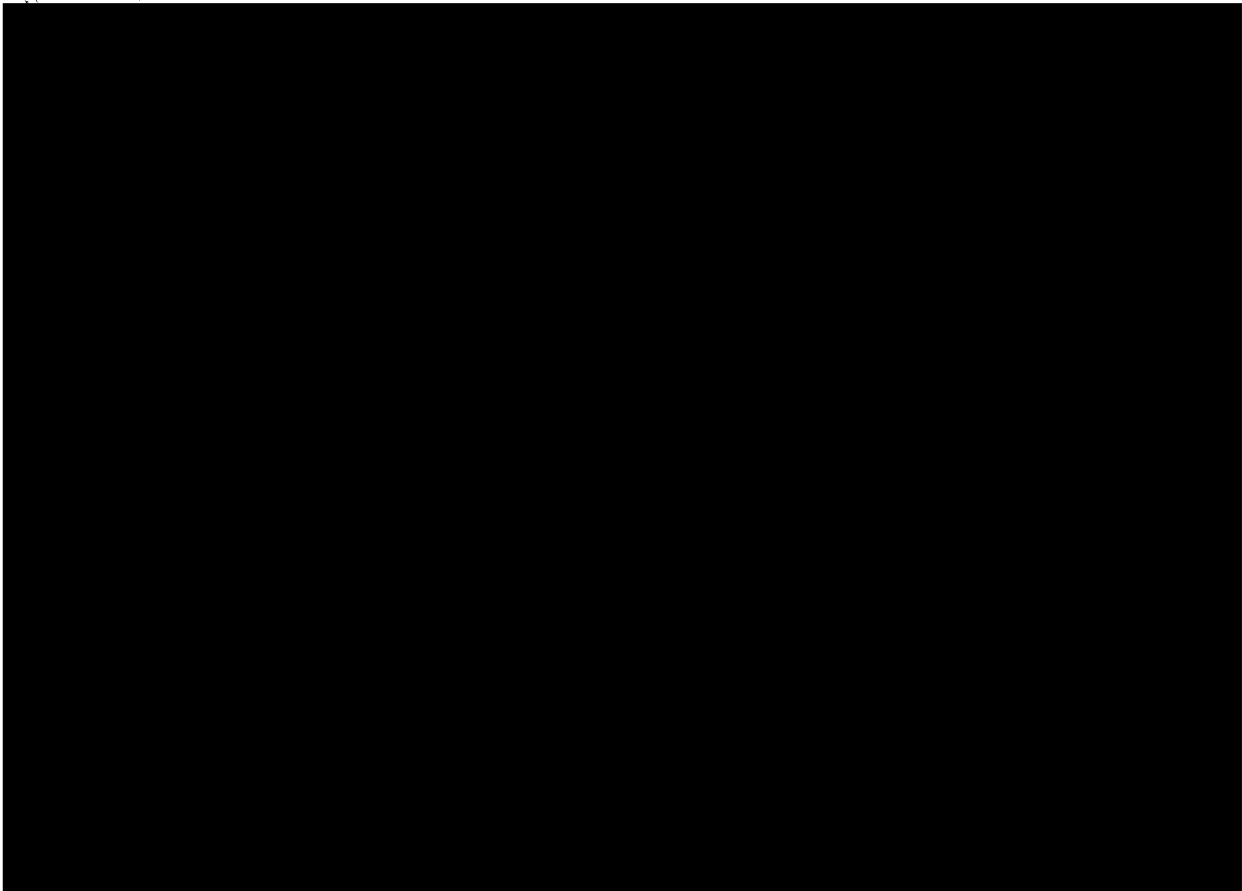
➤ C “Papel de trabajo que contiene la determinación del Impuesto al Valor Agregado a cargo de *****

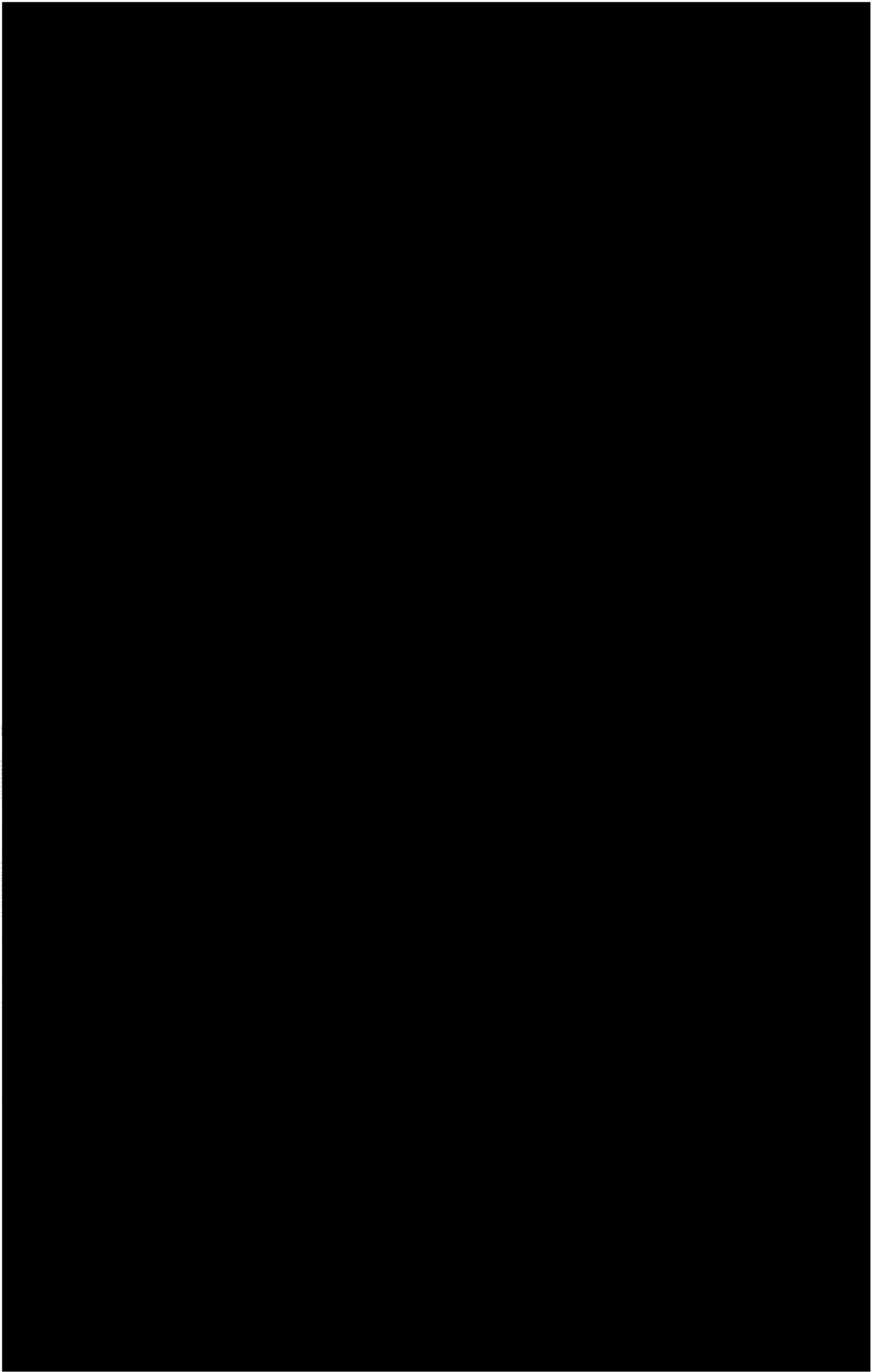
***** correspondiente al mes de enero de dos mil dieciséis”;

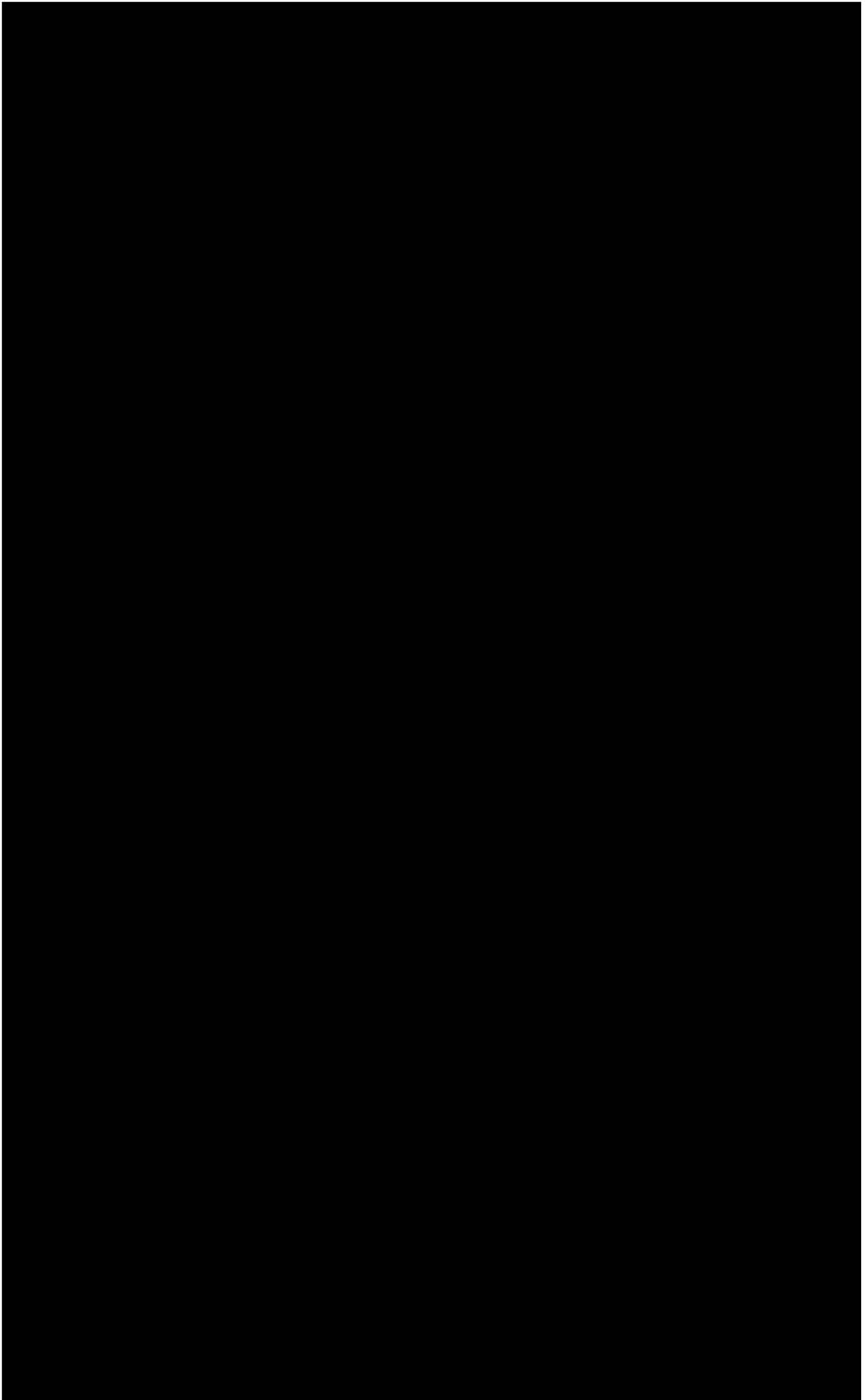
➤ D “Las documentales consistentes en el papel de trabajo y registros contables *****

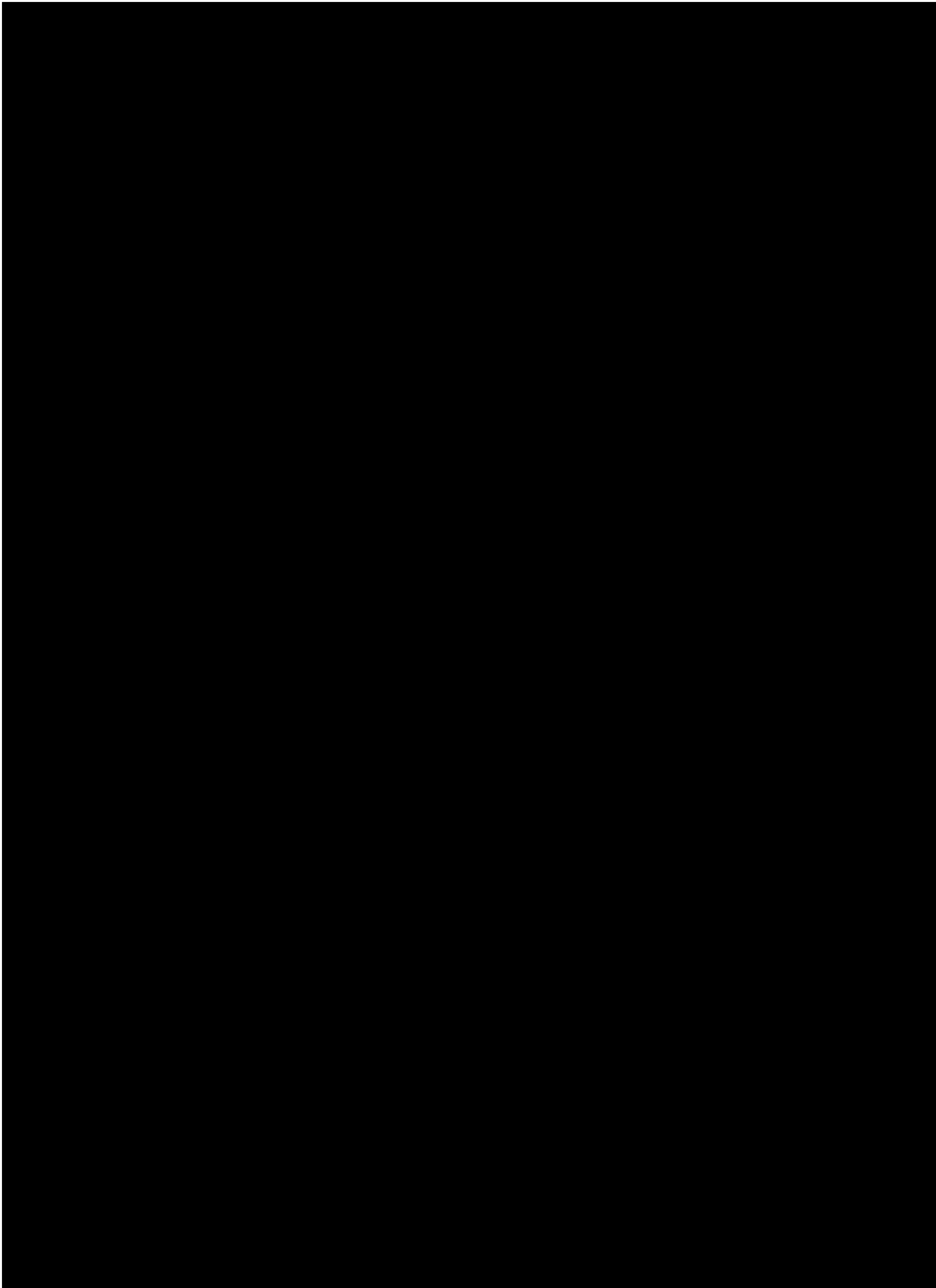
***** referidas, en favor de la parte quejosa”

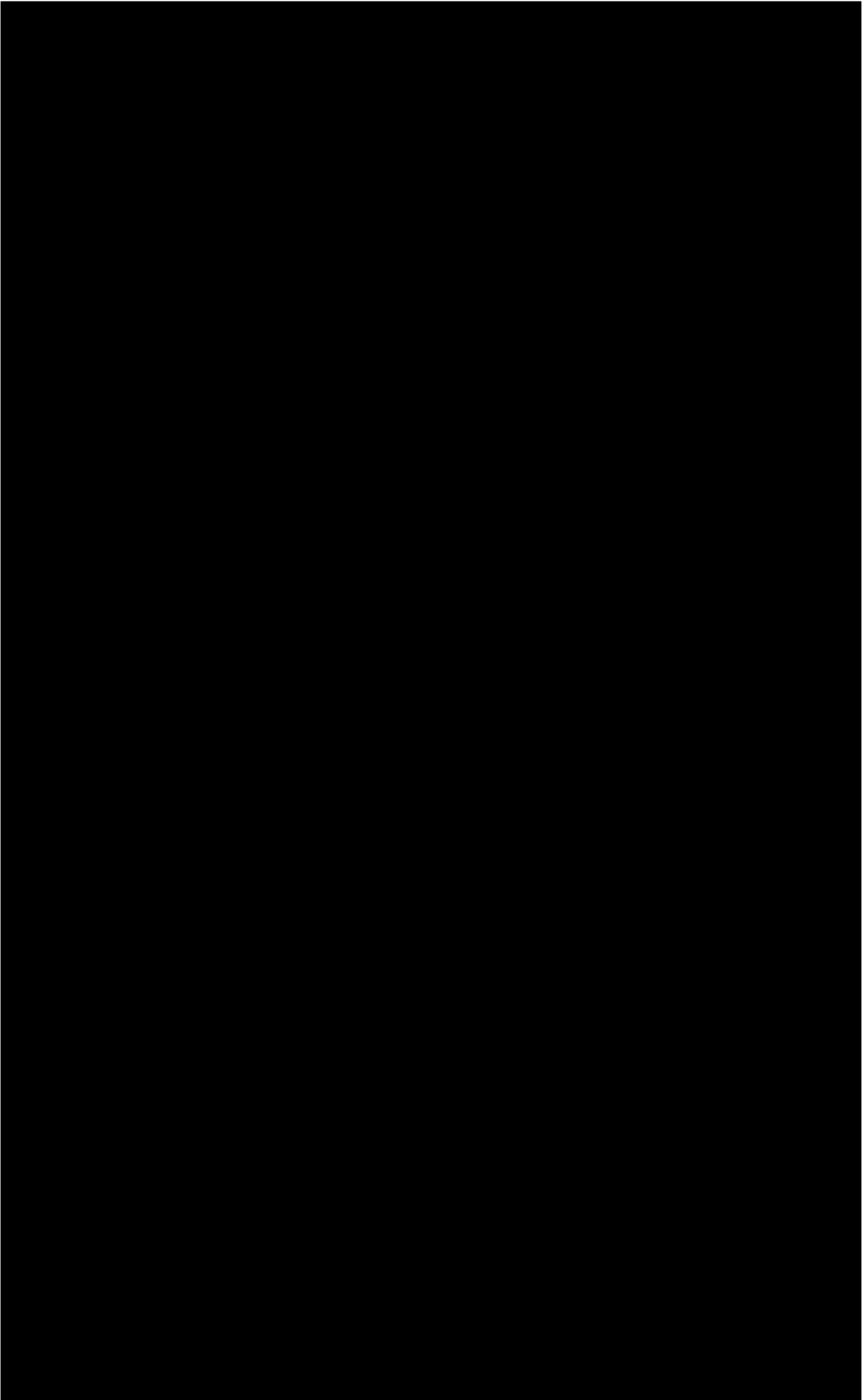
Dichas documentales son del orden siguiente:





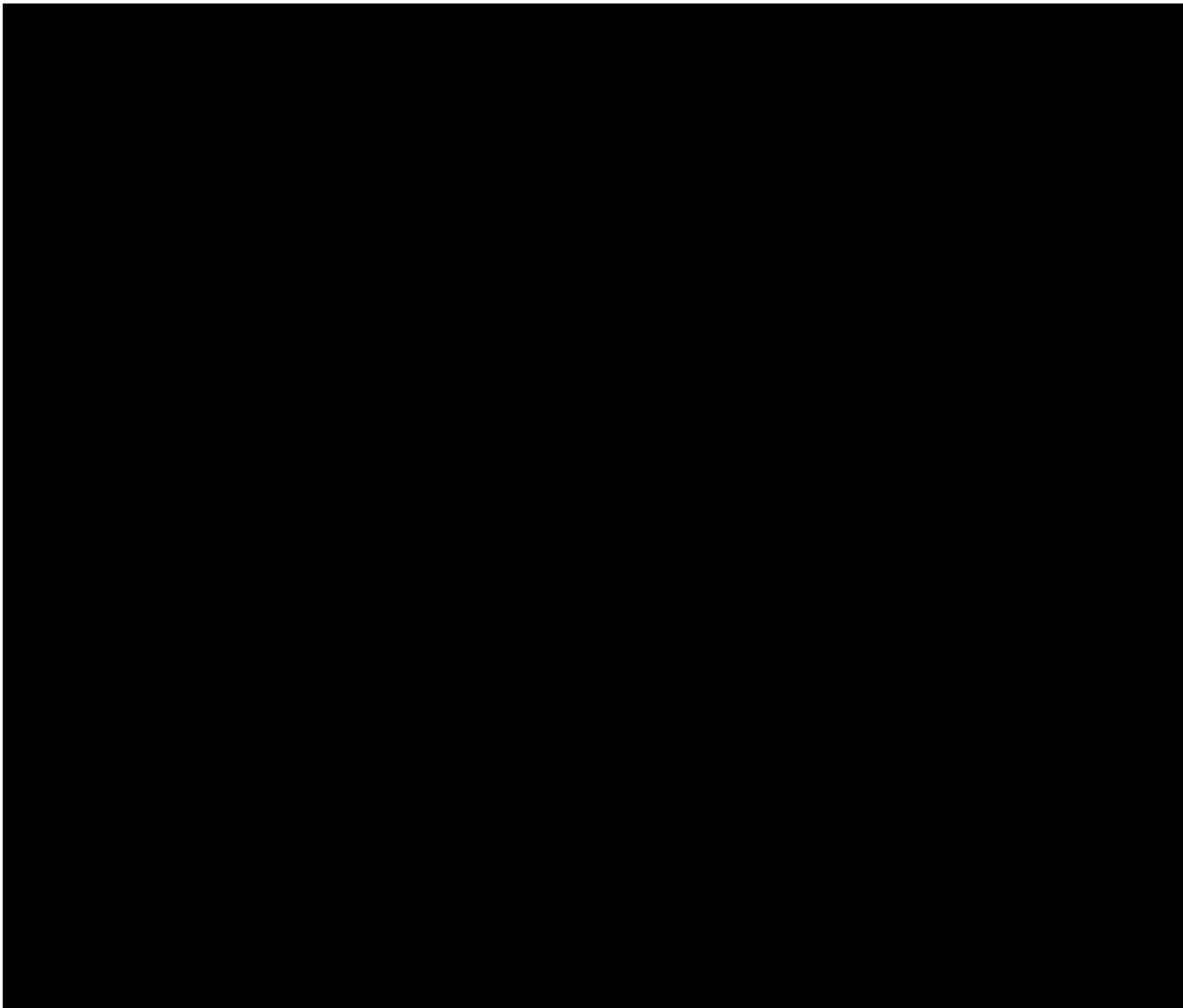






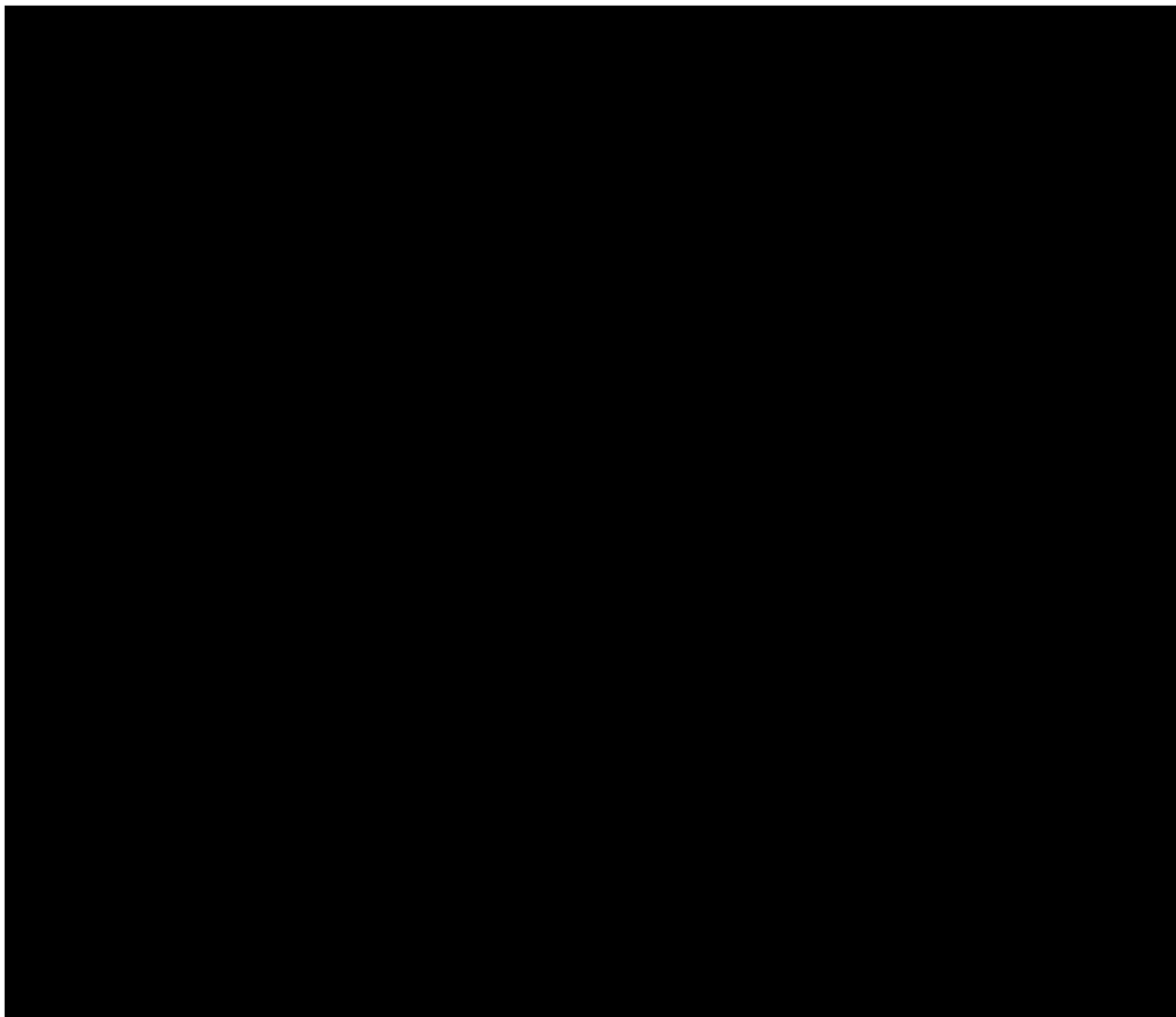
~ 59 ~

de dos mil dieciséis”; “Las documentales consistentes en el papel de trabajo y registros contables de ***** ** referidas, en favor de la parte quejosa”, documentales que son del orden siguiente en la parte conducente:



La documental antes inserta que la identificada como “Papel de trabajo pago definitivo de IVA enero 2016”, y de su contenido se desprende en esencia que respecto de “enero normal” se asentó la cantidad de \$***** por lo que hace al concepto de actividades gravadas al 16% en el rubro de IVA trasladado, lo cual causó un Impuesto al Valor Agregado trasladado de \$***, arrojándole misma cantidad

~ 61 ~



De la misma manera se advierte que en tal prueba se separa la cantidad materia de la operación la cual es de \$***** moneda nacional, de los cuales \$***** corresponden al monto de la contraprestación y la diversa cantidad de \$***** es respecto del Impuesto al Valor Agregado trasladado.

Sobre la misma tónica se procede a acatar lo ordenado por la Superioridad en el sentido de valorar la prueba pericial en materia de contabilidad, la cual cabe recalcar que solo fue desahogada por la parte atora ya que tal y como se hizo constar en el auto de primero de marzo de dos mil veintitrés el cual obra a foja 404 del expediente en que se actúa, el especialista señalado por la enjuiciada fue omiso en rendir el dictamen correspondiente en el término de ley que tenía para ello.

Establecido lo anterior, se tiene que en autos obra el dictamen pericial rendido por el Perito de la parte actora, y al cual se le otorga pleno valor probatorio, en términos de lo previsto por los artículos 46, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia, dado que se estima se encuentra completo en cuanto a la información vertida como respuestas a los cuestionarios propuestos por las partes.

Resulta aplicable al caso concreto el contenido de la Tesis sustentada por el Poder Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe:

No. Registro: 176,491. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXII, Diciembre de 2005. Tesis: V.4o.4 K. Página: 2745

PRUEBA PERICIAL. SU NATURALEZA JURÍDICA Y ALCANCE. La doctrina, en forma coincidente con la esencia de las disposiciones legales que regulan la prueba a cargo de peritos, ha sustentado que la peritación (que propiamente es el conjunto de actividades, experimentos, observaciones y técnicas desplegadas por los peritos para emitir su dictamen), es una actividad procesal desarrollada en virtud de encargo judicial (o incluso ministerial), por personas distintas de las partes del proceso, **especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, clínicos, artísticos, prácticos o científicos**, mediante la cual se suministran al Juez argumentos o razones para la formación de su convicción **respecto de ciertos hechos cuya percepción, entendimiento o alcance, escapa a las aptitudes del común de la gente, por lo que se requiere esa capacidad particular para su adecuada percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas, de sus efectos o simplemente para su apreciación e interpretación.** De esta manera, el perito es un auxiliar técnico de los tribunales en determinada materia, y como tal, su dictamen constituye una opinión ilustrativa sobre cuestiones técnicas emitidas bajo el leal saber y entender de personas diestras y



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

**TERCERA SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE
MÉXICO.**

EXPEDIENTE: 20485/22-17-03-7

ACTOR: ** *** ** ***** ** ** ***



TRABAJANDO POR MÉXICO

~ 63 ~

versadas en materias que requieren conocimientos especializados, expresados en forma lógica y razonada, de tal manera que proporcionen al juzgador elementos suficientes para orientar su criterio en materias que éste desconoce. Ese carácter ilustrativo u orientador de los dictámenes periciales es lo que ha llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los diversos tribunales de la Federación a destacar que los peritajes no vinculan necesariamente al juzgador, el cual disfruta de la más amplia facultad para valorarlos, asignándoles la eficacia demostrativa que en realidad merezcan, ya que el titular del órgano jurisdiccional se constituye como perito de peritos, y está en aptitud de valorar en su justo alcance todas y cada una de las pruebas que obren en autos.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo directo 374/2005. 29 de agosto de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Javier Sánchez Martínez. Secretario: Iván Güereña González. Amparo en revisión 194/2005. 26 de septiembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Javier Sánchez Martínez. Secretaria: Francisca Célida García Peralta. Amparo directo 318/2005. 26 de septiembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Evaristo Coria Martínez. Secretaria: Carmen Alicia Bustos Carrillo. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, octubre de 1999, página 1328, tesis VIII.1o.31 K, de rubro: "PRUEBA PERICIAL, NATURALEZA DE LA." Nota: La denominación actual del órgano emisor es la de Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito.

No. Registro: 173,072. Tesis aislada. Materia(s): Común. Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. XXV, Marzo de 2007. Tesis: 1a. CLXXXVII/2006. Página: 258

En primer lugar, es preciso mencionar que las directrices conforme a las cuales debe ser valorada la prueba pericial en el juicio contencioso administrativo, se infieren de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, así como de los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, siendo estas las siguientes:

La prueba pericial deberá valorarse con la prudente apreciación de la Sala, es decir, queda sujeta a la sana crítica: reglas científicas, lógicas y a las máximas de la experiencia.

Los dictámenes no pueden referirse a cuestiones de hecho o derecho que corresponden valorar exclusivamente al Juzgador, pues dicho medio de prueba debe limitarse a los aspectos de la ciencia, arte o técnica de que se trate.

Los dictámenes tendrán eficacia probatoria únicamente si están fundamentados, es decir, si explican y justifican sus conclusiones, de lo contrario se estará en presencia de un dictamen dogmático o basado en meras apreciaciones subjetivas.

El dictamen debe limitarse al cuestionario, así como al ámbito de las preguntas, razón por la cual no deberá considerarse ninguna cuestión que desborde la prueba pericial.

La eficacia probatoria de los dictámenes no está condicionada por el número de respuestas coincidentes, sino por la explicación y justificación de los mismos que causen plena convicción al Juzgador, en el contexto de la sana crítica.

Al respecto, la fracción III del artículo 46 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, indica que el valor de las pruebas pericial y testimonial, así como el de las demás pruebas, quedará a la prudente apreciación de la Sala, de manera tal que cuando el citado precepto legal refiere a la “**prudente apreciación**” de la Sala Fiscal, ello no implica de manera alguna incurrir en arbitrariedad; lo anterior es así, en

~ 65 ~

tanto que la valoración, a través de la libre convicción está sujeta a la **sana crítica**, es decir, a las **reglas científicas, lógicas y las máximas de la experiencia**.

Dicha prudente estimación, significa que la valoración de la prueba pericial no está sujeta a un método legal o tasado, sino que es libre, lo que no implica que la que se lleve a cabo esté exenta de una exposición razonada que desarrolle las conclusiones a las que arribe, porque ese ejercicio de razonabilidad, también exige el respeto al principio de legalidad que obliga, en el ejercicio jurisdiccional, a motivar las conclusiones que expliquen por qué el dictamen pericial provoca convicción para el dictado de la sentencia, lo que significa que el desahogo de la pericial no significa que en automático queden probados los hechos que pretende acreditar la parte que la ofrece, sino que ello es materia de la valoración que este Cuerpo Colegiado efectúe sobre los dictámenes periciales que en su caso se rindan para tal efecto.

Lo expuesto tiene sustento, por **las consideraciones que la soportan**, en la jurisprudencia **I.3o.C. J/33** emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, en julio de 2004, en la página 1490, del contenido siguiente:

“PRUEBA PERICIAL, VALORACIÓN DE LA. SISTEMAS.

En la valoración de las pruebas existen los sistemas tasados o legales y pruebas libres, o de libre convicción. Las pruebas legales son aquellas a las que la ley señala por anticipado la eficacia probatoria que el juzgador debe atribuirles. Así, el Código de Comercio en sus artículos 1287, 1291 a 1294, 1296, 1298 a 1300, 1304 y 1305, dispone que la confesión judicial y extrajudicial, los instrumentos públicos, el reconocimiento o inspección judicial y el

testimonio singular, hacen prueba plena satisfechos diversos requisitos; que las actuaciones judiciales, los avalúos y las presunciones legales hacen prueba plena, y que el documento que un litigante presenta, prueba plenamente en su contra. Por otra parte, las pruebas de libre convicción son las que se fundan en la **sana crítica**, y que constituyen las **reglas del correcto entendimiento humano**. En éstas interfieren las **reglas de la lógica con las reglas de la experiencia del Juez**, que contribuyen a que pueda analizar la prueba con arreglo a la **sana razón y a un conocimiento experimental de las cosas**. Esos principios se encuentran previstos en el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, al establecer que los medios de prueba aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo cuidadosamente los fundamentos de la valoración jurídica y de su decisión. De modo que salvo en aquellos casos en que la ley otorga el valor probatorio a una prueba, el Juez debe decidir con arreglo a la sana crítica, esto es, sin razonar a voluntad, discrecionalmente o arbitrariamente. Las reglas de la sana crítica consisten en su sentido formal en una operación lógica. Las máximas de experiencia contribuyen tanto como los principios lógicos a la valoración de la prueba. En efecto, el Juez es quien toma conocimiento del mundo que le rodea y le conoce a través de sus procesos sensibles e intelectuales. **La sana crítica es, además de la aplicación de la lógica, la correcta apreciación de ciertas proposiciones de experiencia de que todo hombre se sirve en la vida**. Luego, es necesario considerar en la valoración de la prueba el carácter forzosamente variable de la experiencia humana, tanto como la necesidad de mantener con el rigor posible los principios de la lógica en que el derecho se apoya. Por otra parte, el peritaje es una actividad humana de carácter procesal, desarrollada en virtud de encargo judicial de ciertos hechos, también por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por su experiencia o conocimientos técnicos, artísticos o científicos y mediante la cual se suministran al Juez argumentos y razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos, también especiales, cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente y requieren esa capacidad



TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

TERCERA SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

EXPEDIENTE: 20485/22-17-03-7

ACTOR: ** ***** ** ***** ***** ** *****



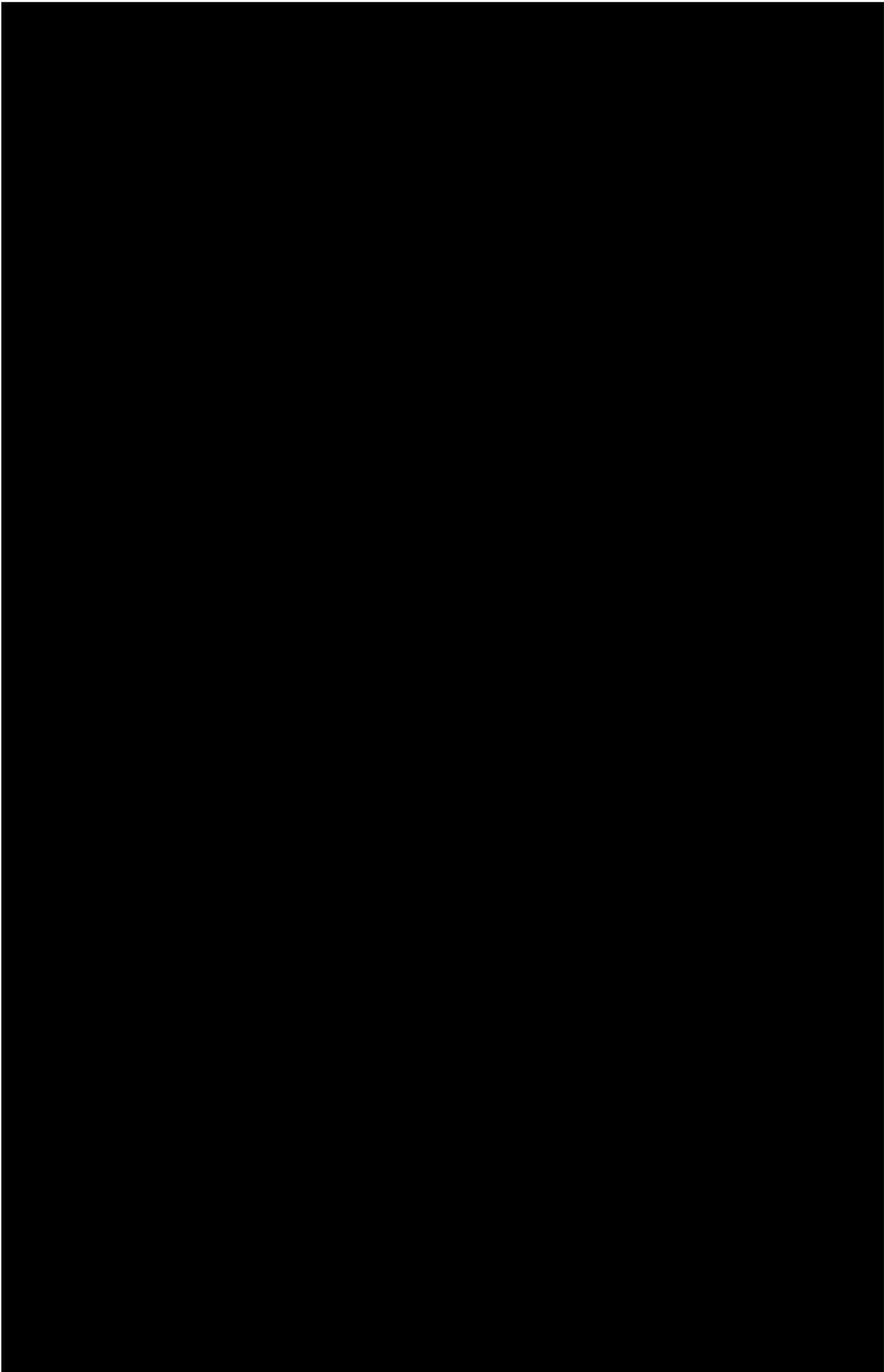
~ 67 ~

particular para su adecuada percepción y la correcta verificación de sus relaciones con otros hechos, de sus causas y de sus efectos o, simplemente, para su apreciación e interpretación. Luego, la peritación cumple con una doble función, que es, por una parte, verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común del Juez y de la gente, sus causas y sus efectos y, por otra, suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos, para formar la convicción del Juez sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente. Por otra parte, en materia civil o mercantil el valor probatorio del peritaje radica en una presunción concreta, para el caso particular de que el perito es sincero, veraz y posiblemente acertado, cuando es una persona honesta, imparcial, capaz, experta en la materia de que forma parte el hecho sobre el cual dictamina que, además, ha estudiado cuidadosamente el problema sometido a su consideración, ha realizado sus percepciones de los hechos o del material probatorio del proceso con eficacia y ha emitido su concepto sobre tales percepciones y las deducciones que de ellas se concluyen, gracias a las reglas técnicas, científicas o artísticas de la experiencia que conoce y aplica para esos fines, en forma explicada, motivada, fundada y conveniente. **Esto es, el valor probatorio de un peritaje depende de si está debidamente fundado. La claridad en las conclusiones es indispensable para que aparezcan exactas y el Juez pueda adoptarlas; su firmeza o la ausencia de vacilaciones es necesaria para que sean convincentes; la lógica relación entre ellas y los fundamentos que las respaldan debe existir siempre, para que merezcan absoluta credibilidad. Si unos buenos fundamentos van acompañados de unas malas conclusiones o si no existe armonía entre aquéllos y éstas o si el perito no parece seguro de sus conceptos, el dictamen no puede tener eficacia probatoria.** Al Juez le corresponde apreciar estos aspectos intrínsecos de la prueba. No obstante ser una crítica menos difícil que la de sus fundamentos,

puede ocurrir también que el Juez no se encuentre en condiciones de apreciar sus defectos, en cuyo caso tendrá que aceptarla, pero si considera que las conclusiones de los peritos contrarían normas generales de la experiencia o hechos notorios o una presunción de derecho o una cosa juzgada o reglas elementales de lógica, o que son contradictorias o evidentemente exageradas o inverosímiles, o que no encuentran respaldo suficiente en los fundamentos del dictamen o que están desvirtuadas por otras pruebas de mayor credibilidad, puede rechazarlo, aunque emane de dos peritos en perfecto acuerdo. Por otra parte, **no basta que las conclusiones de los peritos sean claras y firmes, como consecuencia lógica de sus fundamentos o motivaciones, porque el perito puede exponer con claridad, firmeza y lógica tesis equivocadas. Si a pesar de esta apariencia el Juez considera que los hechos afirmados en las conclusiones son improbables, de acuerdo con las reglas generales de la experiencia y con la crítica lógica del dictamen, éste no será conveniente, ni podrá otorgarle la certeza indispensable para que lo adopte como fundamento exclusivo de su decisión**, pero si existen en el proceso otros medios de prueba que lo corroboren, en conjunto podrán darle esa certeza. Cuando el Juez considere que esos hechos son absurdos o imposibles, debe negarse a aceptar las conclusiones del dictamen.
[Énfasis añadido]

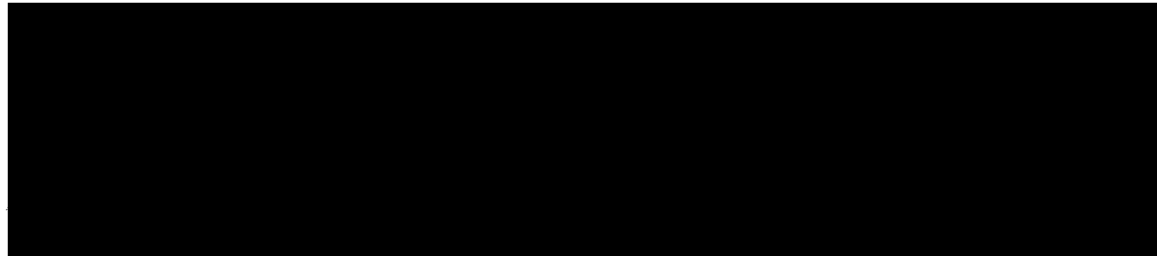
En ese orden de ideas, se tiene que la pretensión de la parte actora con el desahogo de la pericial de que se trata es probar que el el Impuesto al Valor Agregado respecto de la operación celebrada con ***** ***** ** ** ** ** ***** ***** ** ***** ** ***** ** ** ***** ** ***** , se encuentra efectivamente pagado mediante flujo de efectivo y no así por compensación.

Prueba desahogada en los siguientes términos, por el perito designado por la accionante, documental que a continuación se digitaliza en su parte conducente:



~ 71 ~

3.



De lo inserto se advierte que el perito en materia de contabilidad tuvo a bien señalar que en atención a la pregunta número 1, que de conformidad con el análisis practicado a la documentación e información que obra en el expediente de la solicitud de devolución, del recurso de revocación previo y del presente juicio de nulidad, se pudo constatar que la contraprestación pactada entre *****
****, antes *****
***** fue relativa a la enajenación de una flotilla de *****
***** \$***** y que la diferencia ** \$***** corresponde a comisiones bancarias.

Que del papel de trabajo realizado por *****
*****, denominado "*****", se desprende que se contiene la integración de la contraprestación pactada por la adquisición de la flotilla de *****
***** \$***** , la cual incluye el impuesto al valor agregado de ** \$***** y que la integración de la cantidad de \$***** , se encuentra debidamente relacionada con los comprobantes fiscales digitales por internet correspondientes a cada una de las 22 aeronaves.

Que una vez llevada a cabo la conversión de las cantidades a moneda nacional se obtienen los montos totales los cuales ascienden a \$3,411'986,698, el cual incluye el impuesto al valor agregado de \$470'618,855.

Que, del análisis de la información, pudo constatar que en el papel de trabajo denominado "*** ***** ***** Enero 2016**", elaborado *********, mismo que contiene la determinación del impuesto al valor agregado del mes de enero de 2016, se registra como parte de los actos o actividades gravados a la tasa del 16%, la operación de enajenación de la flotilla de *** ***** ***, cantidad que asciende a **\$******* y el impuesto al valor agregado correspondiente de **\$*******, lo que resulta en una diferencia mínima respecto de los papeles de trabajo de *********

Luego así ante el cuestionamiento contenido en el arábigo 2 del cuestionario respectivo se tiene que el perito respecto de la forma en que se pagó la operación llevada a cabo *********, y el impetrante, establece que la contraprestación que pagó el hoy actor, por la adquisición de la flotilla de *** ***** ***, se realizó mediante dos formas de pago o extinción de las obligaciones; (i) transferencia electrónica de fondos y (ii) compensación de adeudos entre las partes.

Que por lo que hace al pago efectuado por medio de transferencia electrónica, determinó que en el estado de cuenta abierto en dólares americanos con número de contrato *********, a nombre de *** ***** ***, correspondiente al mes de enero de 2016, existe un retiro (salida de dinero), por la cantidad de ***** \$*******; cantidad que multiplicada por el tipo de cambio publicado por el Diario Oficial de la Federación ******* \$*******

Asimismo, señala que en el estado de cuenta número *********, abierto a nombre de *********, en *********, correspondiente al mes de enero de 2016, existe un abono (entrada de dinero), por la cantidad de ***** \$*******

En esta línea de análisis procede a establecer que, la segunda contraprestación por la adquisición de la flotilla de ** *****, se pagó por medio de la compensación de adeudos entre las partes, que asciende a la cantidad de *** \$*****, y que deriva del saldo de los depósitos de seguridad de los contratos de arrendamiento de aeronaves que correspondía transmitir a ** *****, al ser ella la nueva arrendadora de los mismos.

Que, al respecto, se pudo constatar que los arrendatarios de las aeronaves entregaron dinero a título de depósitos en garantía a *****, anterior dueño de las aeronaves), con motivo de la celebración de los contratos de arrendamiento, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.

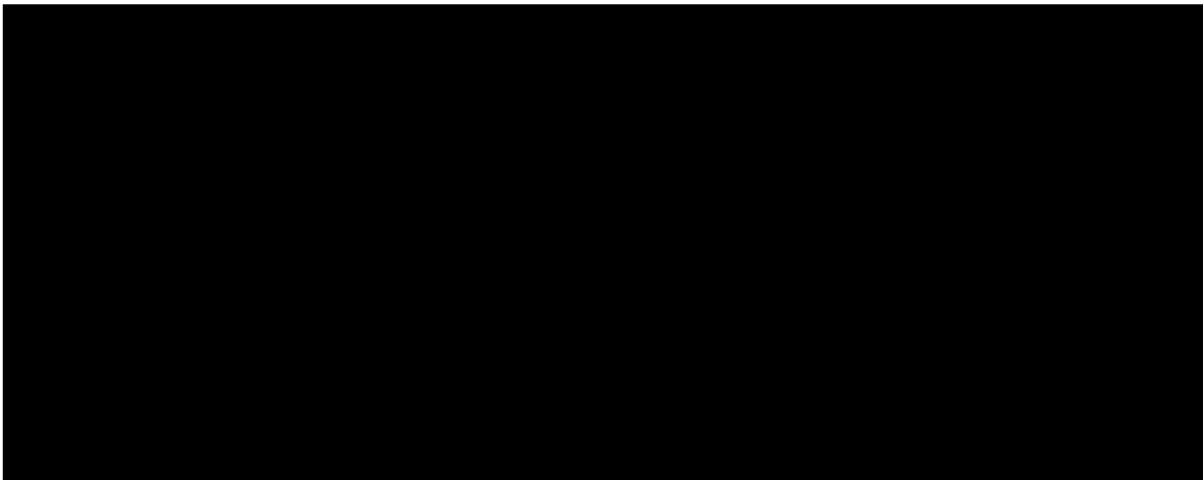
Es decir, el arrendatario entregó cantidades a título de depósito en garantía, como ocurre normalmente en cualquier contrato de arrendamiento. También como en cualquier contrato de arrendamiento, los depósitos debían ser devueltos a los clientes a la finalización de los contratos correspondientes, siempre y cuando ciertas condiciones fueran cumplidas.

Lo anterior ya que, como consecuencia de la enajenación de las aeronaves habría un nuevo arrendador *** *****, correspondía que el anterior arrendador le entregara el dinero correspondiente a los depósitos de seguridad.

No obstante, el anterior arrendador *****, no entregó dichos depósitos a ** *****, por lo que se generó una cuenta por cobrar en favor de esta última sociedad por la cantidad equivalente a los depósitos en garantía. Es decir, ** *****, se convirtió en acreedor de *****, respecto de dichos depósitos en garantía.

** ** ***** ** ***** ***** ** ***** ** ***** ** *****
 ***** ** ***** ** ***** ** ***** ** *****

Que resulta importante hacer mención que, del análisis a dicha documentación, se desprende que en los contratos de cesión de derechos celebrados por ** ***** ** ***** ** ***** ** ***** ***** *
 ***** ***** ** ***** ** ***** ***** ** ***** ***** ** ***** ** *****
 (cedente), existe una cláusula que establece que todos los depósitos en garantía y demás derechos de propiedad, se transmiten en favor del cesionario, tal y como se cita a continuación:



Sigue manifestando el perito en contabilidad que del análisis a los contratos de arrendamiento mencionados coinciden en el monto de los depósitos de seguridad con lo plasmado en el papel de trabajo denominado "Copia de Relación de facturas emitidas a la contribuyente ** ***** ** ***** ** ***** ** *****". Por tanto, con esa información se confirma que el saldo de dichos depósitos es de \$*****.

Por lo tanto, el especialista en la materia contable establece que, el monto de \$***** corresponde a los depósitos de seguridad y que dicho importe se compensó contra el monto que ** ***** ** ***** ** ***** ** *****
 , adeudaba a *** ***** ** ***** ***** *****
 ***** ** ***** ** *****), con motivo de la venta de las aeronaves.

Que del papel de trabajo denominado "Copia de Relación de facturas emitidas a la contribuyente ** ***** ** ***** ** *****

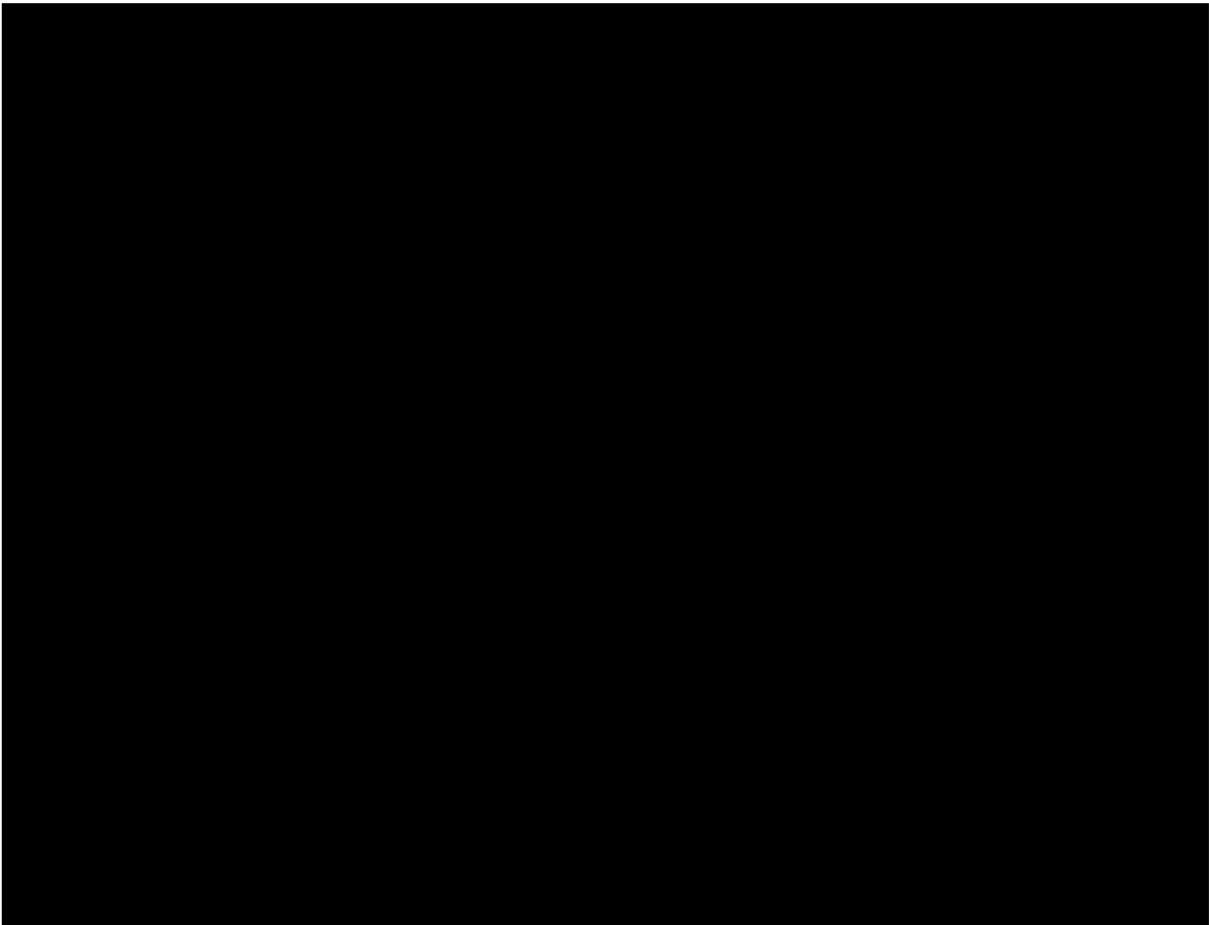
TERCERA SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

Asimismo, en el papel de trabajo denominado "*****
***** ***, que realizó ***** ***,
***** ***, con motivo de la contraprestación por
la enajenación de la flotilla *****.

Adicionalmente, señala que en la balanza de comprobación de **** ***** ** ***** ** ** ***** ** *******, hay un cargo al saldo del mes de enero de 2016, en la cuenta contable **"***** IVA acreditable pagado"** por **\$*******, es decir, que el impuesto al valor agregado efectivamente pagado por la contraprestación de las 22 aeronaves está incluido dentro de esa cantidad.

Asimismo, reiteró que en el análisis a los papeles de trabajo de ** ***** ** ***** ** ** **** ** ****, observé que en el archivo Excel denominado "Poliza Registro Contable Pago", se encuentra la póliza de diario del 28 de enero de 2016, en la cual se reconoció contablemente el pago de la contraprestación en favor ***** ***** ***** ***** **, por concepto de "Pago de Activo Fijo a ***** ***** ** ***** ** *****", por medio de la transferencia electrónica ** ***** ***** ** ***** ** ** ** ** ** **, con el impuesto al valor agregado correspondiente, tal y como se muestra en la siguiente digitalización:

~ 79 ~



Que tomando en consideración lo anterior, se percató de la salida de dinero en favor de *****), por \$***** siendo que esta cantidad incluye el pago del impuesto al valor agregado.

Por último, es importante señalar que el perito establece que el impuesto al valor agregado trasladado por *****), que amparan la operación de enajenación de la flotilla de *****.

Que es en virtud de lo anterior que el impuesto al valor agregado trasladado *****), con motivo de la

enajenación de la flotilla de las **** *******, sí se encuentra efectivamente pagado, mediante la entrega de recursos en efectivo y la compensación de adeudos entre las partes, que tiene efectos similares a la entrega en efectivo de dinero, pero que por cuestión práctica simplemente se opta por una compensación, que cancela ambos adeudos con motivo de su pago (cumplimiento).

Asimismo, al dar respuesta a la pregunta número 4, el perito señaló que efectivamente ***** consideró como efectivamente pagada toda la contraprestación pactada con **, por la enajenación de la flotilla de las ** para efectos del impuesto al valor agregado.

Al respecto, reiteró lo argumentado en el sentido de que la contraprestación fue efectivamente liquidada a *****), por la cantidad total de \$*****', monto que incluye el impuesto al valor agregado correspondiente de \$*****'

Vuelve a mencionar que lo anterior, fue de su conocimiento ya que con base en la transferencia bancaria y la compensación del saldo de los depósitos de seguridad antes referidos contra el importe restante de las aeronaves, por medio de los cuales ** ***, efectivamente liquidó la contraprestación pactada con ***, para efectos del impuesto al valor agregado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Que lo previamente esbozado se confirmó con el papel de trabajo denominado "Pólizas Ingresos" de *****
 , el cual está referenciado al papel de trabajo "Relación de facturas emitidas a la contribuyente ***
 ", en el cual se observa el registro del ingreso por cada una de las *** enajenadas a *****

~ 81 ~

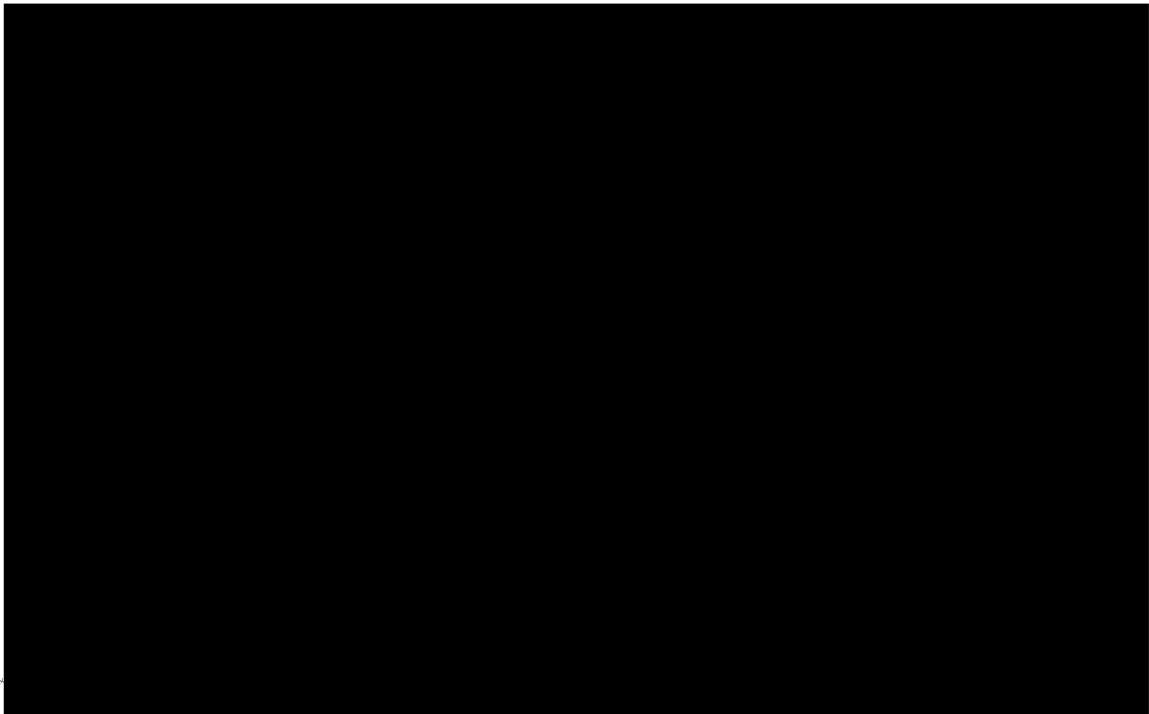
Que lo expuesto en el párrafo precedente se confirma con la declaración normal y complementaria del impuesto al valor agregado correspondiente al mes de enero de 2016, de ***** ** ** *, en donde se declaró un impuesto al valor agregado causado (trasladado) en ese periodo de \$***** , así como de la integración de ese impuesto causado denominada "***** IVA Enero 2016", que incluye al generado con motivo de la enajenación de las aeronaves.

Por lo que***** , consideró como efectivamente pagada la contraprestación para efectos del impuesto al valor agregado del mes de enero de 2016, pues así lo consignó en el valor de los actos o actividades gravados de ese mes.

Manifiesta el perito que, de la información contable y fiscal del vendedor, se desprende que éste consideró como valor de actos o actividades gravados el importe total de la contraprestación y el impuesto al valor agregado respectivo, con total independencia de que éste se liquidó por dos medios distintos de extinción de obligaciones.

Que es en base a todo lo expresado que se puede constatar que efectivamente, ***** ** ** * consideró como pagada toda la contraprestación pactada con ***** , por la enajenación de la flotilla de las ***** , para efectos del impuesto al valor agregado.

Adicionalmente, señala que ***** consideró como causado y pagado la totalidad del impuesto al valor agregado trasladado a ***** , con motivo de la enajenación de la flotilla de las ***** , en la declaración de enero de 2016.



Lo anterior, sirvió de base en la revisión llevada a cabo en su actuar de peritaje para poder validar que lo registrado en la contabilidad de ***** ** ** ** ***) , coincide con lo que manifestó en la declaración mensual del impuesto al valor agregado de enero de 2016.

Que, de la declaración provisional o definitiva normal del impuesto al valor agregado de enero de 2016, ***** ** ** ** ***)
***** ** ** ***)
*** **% ** ***** ** \$***** ** ***** ** \$***** **
***** ** ** ***)
**** ** ***)

En relación con lo anterior, en la determinación del impuesto al valor agregado a cargo o a favor correspondiente al mes de enero de 2016

***** \$*****
***** \$*****
***** \$*****
***** \$*****), mismo

que fue liquidado al Servicio de Administración Tributaria, por medio de transferencia electrónica realizada por esa misma sociedad, por el monto respectivo, el día 17 de febrero de 2016.

Que es en base a todo lo expuesto que, en su opinión, *****
*****), sí consideró
como causado y pagado la totalidad del impuesto al valor agregado
trasladado a *****
enajenación de la flotilla de las *****
2016.

Finalmente, el perito señala que la razón de su dicho es bajo protesta de decir verdad, manifiesta que las respuestas y opiniones asentadas en dicho peritaje se encuentran expresadas con imparcialidad y bajo su absoluto saber y entender, tomando en consideración toda la información y documentación contable precisada en cada una de ellas, consistente en actas de asamblea, contratos, papeles de trabajo, registros contables, estados de cuenta, facturas emitidas a la sociedad recurrente, entre otra información y documentación que me fue proporcionada por *****
*****), y que obra en el expediente de la devolución,
del recurso de revocación previo y del presente juicio de nulidad.

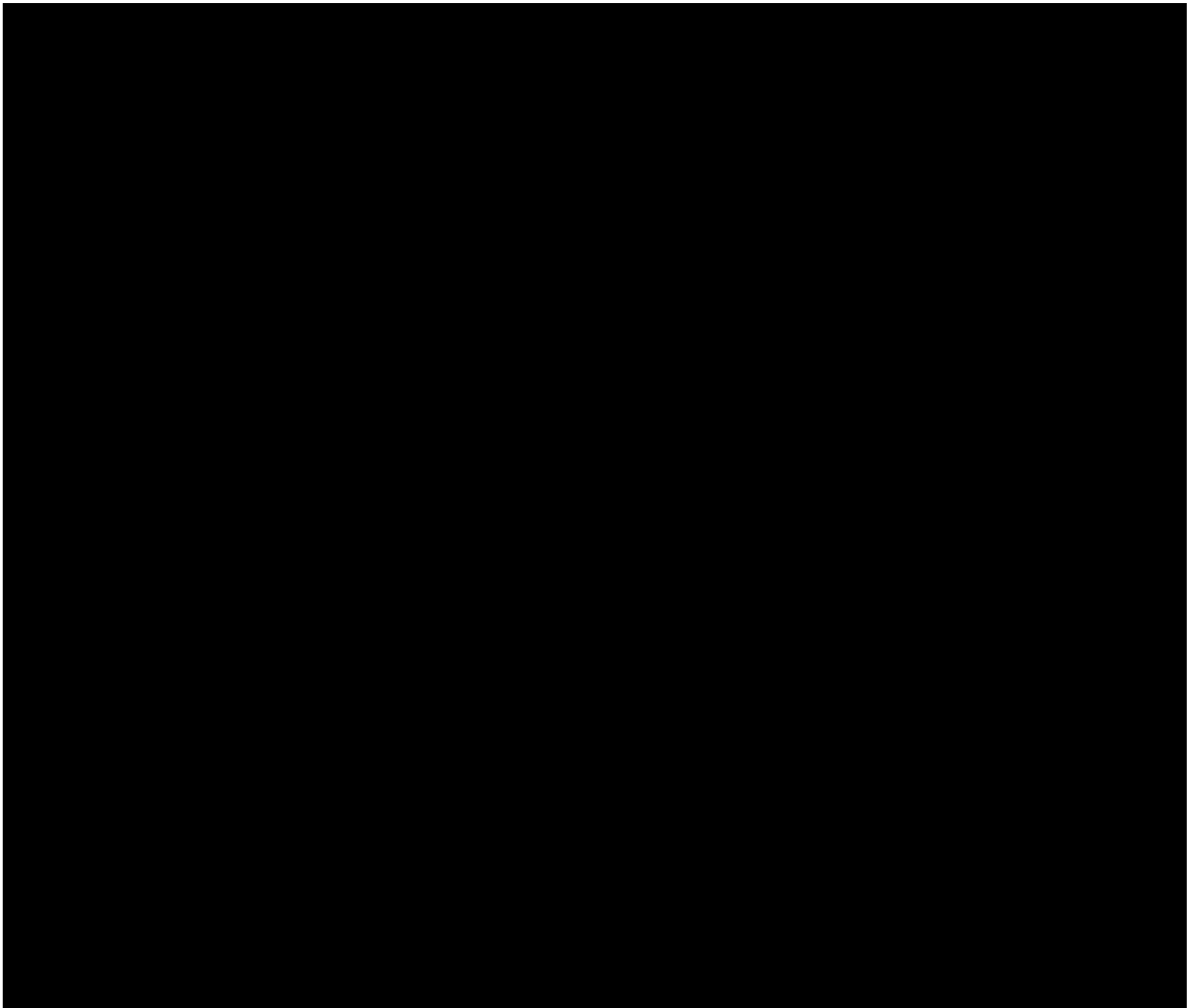
En base a lo relatado y concatenando los medios probatorios ofertados por el accionante, así como el estudio y valoración de la prueba pericial en materia de contabilidad, caudal probatorio que se valora en términos del artículo 46 fracciones I y III de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, se puede arribar a la conclusión de que tal y como lo expone el impetrante de nulidad, la cantidad de \$*****
efectivamente pagada mediante la transferencia bancaria realizada por el

~ 85 ~

accionante en cantidad de \$*****'***** ***** ** ***** ** ***** ** ***** ** ***** **
** *** ** ***** ** ***** ** ***** ** ***** ** ** ***** ** ***** , y no mediante
compensación.

Lo anterior encuentra sustento en lo expuesto a lo largo del presente considerando ya que como se afirmó anteriormente la autoridad demandada no expone el fundamento legal en el cual basa su determinación de asignar una parte de la transferencia bancaria a la contraprestación y otra al pago del Impuesto al Valor Agregado y que en base a ello niega de manera parcial la solicitud de devolución planteada.

Ya que sostiene que el actor en ningún documento asentó a que concepto se aplicaría la compensación y que se cubría con la transferencia bancaria, pasando por alto el llevar a cabo un análisis completo de la documentación aportada por el contribuyente hoy impetrante, lo anterior se ilustra con la parte conducente de la resolución la cual es del orden siguiente:





HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Administración General de Auditoría Fiscal Federal
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal del
Distrito Federal "1", con sede en la Ciudad de México
Subadministración Desconcentrada de Auditoría fiscal "5".

Oficio: 500-71-05-02-01-2022-17926
Exp.: SAT-7S.2-2022-VRM1100021/21
R.F.C.: AIM151104AI3
Orden: VRM1100021/21
Número de Control: DCT12000068799
Folio: 3908523

26

Suma Total	\$ 352,250,009.18
------------	-------------------

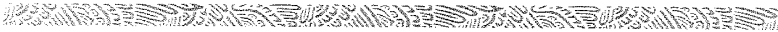
Según los 14 contratos de depósito en garantía de fechas 18 de febrero de 2004, se integran como sigue:

TIPO DE CONTRATO	PARTES QUE LO CELEBRAN	FECHA DEL CONTRATO	DEPOSITO
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PURO	GE CAPITAL CEF MÉXICO, S DE RL DE CV Y AERO QUIMMCO, S.A. DE C.V.	28/08/2007	335000 DOLARES
CONVENIO DE DEPOSITO EN GARANTIA	GE CAPITAL CEF MÉXICO, S DE RL DE CV Y TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	18/02/2004	1,454,055 DOLARES
CONTRATO DE DEPOSITO IRREVOCABLE EN GARANTIA	GE CAPITAL CEF MÉXICO, S. DE RL DE CV Y SERVICIOS CORPORATIVOS SIMSA, SC.	09/08/2007	506,250 DOLARES
CONTRATO DE DEPOSITO IRREVOCABLE EN GARANTIA	GE CAPITAL CEF MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. Y AEROTRES, S.A. DE C.V.	jun-07	349,870.80 DORALES
CONTRATO DE DEPOSITO IRREVOCABLE EN GARANTIA	GE CAPITAL CEF MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. Y AEROLUZ, S.A. DE C.V.	01/07/2009	1,606,223.83 DOLARES
CONTRATO DE DEPOSITO EN GARANTIA	GE CAPITAL CEF MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. Y AEROSERVICIOS REGIONMONTANOS, S.A. DE C.V.	26/05/2011	465,000 DOLARES
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	GE CAPITAL CEF MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. Y CEMEX, S.A. DE C.V.		2,262,750 DOLARES
CONTRATO DE DEPOSITO	GE CAPITAL CEF MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. Y AEROPYCSA, S.A. DE C.V.	10/05/2011	4,900,000 DOLARES
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PURO DE AERONAVE	GE CAPITAL CEF MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. Y SAFE SERVICIOS AEREOS, S.A. DE C.V.	11/09/2007	201000 DOLARES
CONTRATO DE DEPOSITO IRREVOCABLE EN GARANTIA	GE CAPITAL CEF MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. Y AVEMEX, S.A. DE C.V.	30/08/2013	20,000 DOLARES 120 PAGOS MENSUALES
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO PURO DE AERONAVE		23/08/2010	4,224,957.30 DOLARES
CONTRATO DE DEPOSITO DE GARANTIA	GE CAPITAL CEF MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. Y AEROLIDER, S.A. DE C.V.	may-11	225,000 DOLARES
CONTRATO DE DEPOSITO IRREVOCABLE EN GARANTIA	GE CAPITAL CEF MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. Y AEROKALUZ, S.A. DE C.V.	27/08/2008	1,000,000 DOLARES

Al respecto el monto de dichos depósitos de seguridad es de \$352,250,006.00 pesos (Trescientos Cincuenta y Dos Millones Doscientos Cincuenta Mil Seis Pesos 00/100 M.N.), con, el tipo de cambio utilizado es el del día anterior a la operación, esto es, del 27 de enero de 2016 el cual corresponde al T.C. de 18.4715 ya que la fecha de pago fue el día 28 de enero de 2016.

No.	Cliente	R.F.C.	Valor del depósito de seguridad (dólares de los EUA)	Fecha de transacción	T.C. DOF	Valor de depósito de seguridad (moneda nacional)
1	Adro Servicios Aéreos S.A. de C.V.	ASA110701286	1,000,000.00	28-ene-16	18.4715	\$ 18,471,500.00
2	Aero Químico, S.A. de C.V.	AQU890523U03	335,000.00	28-ene-16	18.4715	\$ 6,187,952.50
3	Aero Servicios Regionmontanos, S.A. de C.V.	ASR961105CBA	465,000.00	28-ene-16	18.4715	\$ 8,589,247.50
4	Aerokaluz, S.A. de C.V.	AER050908CV4	1,606,224.00	28-ene-16	18.4715	\$ 29,669,366.62
5	Aerolider, S.A. de C.V.	AER880502DB6	1,225,000.00	28-ene-16	18.4715	\$ 22,627,587.50
6	Aeropycsa, S.A. de C.V.	AER801029H34	4,900,000.00	28-ene-16	18.4715	\$ 90,510,350.00

Bahía de Santa Bárbara No. 23, 3er. Piso Ala "B", Col. Verónica Anzures, C.P. 11300, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Tel. 91383500, ext. 45714. sat.gob.mx / MarcaSAT 55 627 22 728



2022 Ricardo Flores Magón
Año de la Revolución Mexicana

[Redacted Content]

De lo anteriormente inserto se desprende la ilegalidad del actuar de la autoridad ya que como se adelantó no expone fundamento legal en el cual se le facultó para asignar una parte de la transferencia bancaria al pago de la contraprestación y otro al pago del Impuesto al Valor Agregado, por lo tanto, no pude ni debe estimarse que la autoridad cumplió con su obligación de fundar y motivar debidamente su actuar.

Lo anterior, debido a que, del análisis practicado por esta Resolutoria a los medios probatorios, así como a la prueba pericial en materia de contabilidad, pudo advertir que efectivamente el Impuesto al Valor Agregado fue cubierto mediante flujo de efectivo y debe considerarse como efectivamente pagado ya que el mismo ya fue causado y enterado al Fisco Federal, tal situación se corrobora con el recibo de pago que obra en autos y que fue anteriormente inserto.

Por lo tanto, se concluye que le asiste la razón a la actora respecto del argumento consistente en que el Impuesto al Valor Agregado de la transacción celebrada con *****

***** \$***** se encuentra efectivamente pagado y por tanto se le reconoce el derecho subjetivo a la devolución del saldo a favor.

Finalmente, se indica que se da cumplimiento a la ejecutoria de doce de agosto de dos mil veinticinco emitida por el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el D.A. 730/2023, de la siguiente manera:

1. Si el Impuesto al Valor Agregado trasladado en cantidad de \$***** de pesos fue cubierto mediante transferencia bancaria (efectivo) o bien, mediante compensación, con base en los hechos y las pruebas aportadas al expediente. **Se tiene que en base al caudal probatorio y con apoyo en la prueba pericial en materia de contabilidad se pudo arribar a la conclusión que el Impuesto al Valor Agregado fue**

~ 89 ~

efectivamente pagado mediante transferencia bancaria (efectivo).

2. Si la autoridad fiscalizadora cuenta con facultades prevista expresamente por la ley, que le permitan atribuir a que parte de la contraprestación y el Impuesto al Valor Agregado fue aplicada la compensación. **Una vez llevado a cabo el análisis de la resolución impugnada originalmente se llegó a la conclusión de que la autoridad no expone fundamento legal en el cual apoye la determinación de asignar cantidades al pago de la contraprestación y al pago del Impuesto al Valor Agregado.**

3. Si la vendedora de las ***** ***** ***** ** ** **
** ***** ***** ** ***** ** ***** ** ** ***** **, entero al Servicio de Administración Tributaria el Impuesto al Valor Agregado que le trasladó. **Una vez valorados los medios probatorios se advierte que efectivamente como lo sostiene el accionante y el perito en materia de contabilidad si fue efectivamente enterado mediante la declaración correspondiente y el recibo de pago que lo respalda.**

SEPTIMO. Por otra parte, esta Sala procede al estudio y resolución del argumento vertido por el actor en sus conceptos de impugnación, respecto de la cantidad de \$*****\$, por la cual, la autoridad determinó que era improcedente el impuesto al valor agregado acreditable, toda vez que no cumplía con el requisito de acreditamiento establecido en la fracción I del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor

Agregado vigente en 2016, puesto que no resultaba estrictamente indispensable toda vez que provenía de erogaciones realizadas por la contribuyente que no eran deducibles para efectos del impuesto sobre la renta en la parte del excedente el precio de mercado, ya que incumplió con el requisito de deducibilidad consistente en que en el costo de adquisición correspondan a los de mercado, cuando excedan del precio de mercado no será Deducible el excedente.

Por su parte la autoridad demandada sostuvo la legalidad y validez en los términos que este fue emitido.

A juicio de esta Sala el argumento planteado por el actor en el concepto de anulación que se analiza deviene de **fundado** en virtud de las siguientes consideraciones lógico— jurídicas.

En este sentido **en estricto cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de doce de agosto de dos mil veinticinco emitida por el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el D.A. 730/2023, se procede de la manera siguiente:**

Para resolver lo anterior, es necesario traer a colación el contenido de los artículos 5, primer párrafo, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el artículo 27, fracción XIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ambos vigentes en 2016.

Ley del Impuesto al Valor Agregado

“Artículo 5o.- Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado deberán reunirse los siguientes requisitos:

I. **Que el impuesto al valor agregado corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes, estrictamente indispensables para la realización de actividades distintas de la importación, por las que se deba pagar el impuesto establecido en esta Ley o a las que se les aplique la tasa de 0%.** Para los efectos de esta Ley, se consideran estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles



TFJA

TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

TERCERA SALA REGIONAL EN LA CIUDAD DE
MÉXICO.

EXPEDIENTE: 20485/22-17-03-7

ACTOR: ** ***** ** ***** ** *



~ 91 ~

para los fines del impuesto sobre la renta, aun cuando no se esté obligado al pago de este último impuesto. Tratándose de erogaciones parcialmente deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, únicamente se considerará para los efectos del acreditamiento a que se refiere esta Ley, el monto equivalente al impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto al valor agregado que haya pagado con motivo de la importación, en la proporción en la que dichas erogaciones sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta.

(...)"

Ley del Impuesto sobre la Renta.

"Artículo 27. Las **deducciones autorizadas** en este Título deberán **reunir los siguientes requisitos:**

(...)

XIII. **Que el costo de adquisición declarado** o los intereses que se deriven de créditos recibidos por el contribuyente, **correspondan a los de mercado. Cuando excedan del precio de mercado no será deducible el excedente.** (...)"

De conformidad con el artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado se observa como requisito para que el impuesto sea acreditable, que corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes, estrictamente indispensables para la realización de actividades por las que se deba pagar el impuesto sobre la renta; que para tal efecto se considerarán estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas por el contribuyente siempre que sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta.

Por su parte, el artículo 27, fracción XIII de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece como requisito de las deducciones autorizadas para efectos de dicho impuesto, que el costo de adquisición declarado corresponda a los **precios de mercado**.

Por lo que, es precisamente que conforme a lo establecido en dichos preceptos jurídicos, que al momento de adquirir un bien, dicha operación del llevarse a cabo a precios de mercado, con la finalidad de que se considere deducible para efectos del impuesto sobre la renta y acreditable para efectos del impuesto al valor agregado, de ahí lo fundado de los argumentos de la accionante, respecto a que ninguna de dichas disposiciones exige que en este tipo de operaciones, los contribuyentes terceros independientes tengan la obligación de practicar avalúo de los bienes enajenados, **pues es requisito indispensable para llevar a cabo la deducción correspondiente que el costo de adquisición corresponda al precio de mercado**.

Sobre el particular, la accionante manifestó que el precio pactado en la compraventa de la flotilla se acordó entre el grupo corporativo ***** los cuales no son partes relacionadas, por lo que el precio es un precio de mercado. Que el valor de adquisición del portafolio son meros valores de referencia que no modifican el precio efectivamente pactado entre terceros independientes y que es el que recibe el calificativo de ser precio de mercado.

Que con el fin de iniciar negociaciones con el *****
***** para que
realizara un avalúo del valor de mercado de las 22 aeronaves, el cual fue entregado el 15 de julio de 2015. Estudio que sirvió como base para conocer los precios en el mercado adecuados para valuar la operación en comercio e iniciar con las negociaciones, es decir, que sirvió como base para negociar el precio final con un tercero independiente, pero solo este último califica como precio de mercado.

En el caso particular del portafolio mexicano, *****
***** señaló que el valor total de compraventa del portafolio a ser adquirido

~ 93 ~

por la accionante era por un valor estimado de \$***** dólares de los Estados Unidos de América.

***** ** ***** ***** * ***** ***** ** para realizar una valuación final del precio de compraventa con el objetivo de ratificar el valor de cada una de las aeronaves enajenadas, sin que en ningún caso esa valuación modificara el hecho de que el precio pactado entre terceros independientes es en sí mismo, un precio de mercado.

En el caso particular del portafolio mexicano ***** ** señaló que el valor total de compraventa adquirido por la accionante que estuvo compuesto por una ***** ** ***** ** \$***'***** ***** ** ***** ***** ** ***** esto es un valor menor al efectivamente pagado por la accionante el cual fue de \$***** ***** ** ***** ***** ** *****

Por lo que, el valor diferencial entre el monto efectivamente pagado por la accionante y el valor del avalúo de ***** ** ** ** \$***** ***** ** ***** ***** ** *****

Luego así, es importante establecer que debe de entenderse por precio de mercado y valor de mercado, que a saber es:

Se tiene que la diferencia entre los conceptos de valor de mercado y precio de mercado donde el primero de estos se puede definir de la siguiente manera:

- **Valor de mercado.** Valor en términos monetarios de un bien, producto o servicio que se ve afectado por la ley de la oferta y la demanda.

- **Precio de mercado.** Debe entenderse como un valor en términos monetarios asignado a un bien, producto o servicio por parte del oferente el cual los consumidores están dispuestos a pagar.

De lo anterior se sigue que, el **precio de mercado** contrario al **valor de mercado** no se ve afectado por la ley de la oferta y la demanda, ya que por diversas razones como lo son el prestigio, la exclusividad, la marca, los materiales e incluso el nombre y la reputación de las personas que intervienen, hacen del bien, un producto o servicio único y de estas características no se encontrará otro producto, bien o servicio igual en el mercado, por lo tanto, el precio de mercado no se encuentra sujeto a la ley de la oferta y la demanda y será decisión del oferente establecer el precio que crea conveniente.

Por lo tanto, y tomando en consideración las constancias que obran en el expediente administrativo del presente asunto, se advierte que posteriormente a la compraventa de las ** ***** ***** ** ***** ***** *
** ***** ***** ** ***** ***** ***** ***** **, con la finalidad de realizar una valuación final al precio de compraventa con el objetivo de ratificar el valor de cada una de las aeronaves adquiridas de conformidad con la Codificación 805 de las Normas Contables del Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB), avalúo practicado el 02 de agosto de 2016, no obstante del análisis realizado a los comprobantes fiscales emitidos por ***** ***** ** ** ***** ** ***** ***** ** ***** ***** ** ***** ** ***** la autoridad fiscalizadora observó que las ***** ***** ***** * ** ***** **
***** ** * ** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
* ** ***** ***** ** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
** ** ***** ***** * ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Se sostiene la aseveración realizada en el párrafo precedente en virtud de que como ya se hizo mención el precio de mercado es aquel que se pacta entre las partes y no el establecido en un avalúo tan es así que el artículo 34 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado señala que:

~ 95 ~

LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Artículo 34.- Cuando la contraprestación que cobre el contribuyente por la enajenación de bienes, la prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, no sea en efectivo ni en cheques, sino total o parcialmente en otros bienes o servicios, **se considerará como valor de éstos el de mercado o en su defecto el de avalúo.** Los mismos valores se tomarán en cuenta tratándose de actividades por las que se deba pagar el impuesto establecido en esta Ley, cuando no exista contraprestación.

Del precepto anteriormente transcrito se desprende que cuando la contraprestación que cobre el contribuyente por la enajenación de bienes, la prestación de servicios o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, no sea en efectivo ni en cheques, sino total o parcialmente en otros bienes o servicios, **se considerará como valor de éstos el de mercado o en su defecto el de avalúo.**

De lo anterior se tiene que el propio precepto hace una distinción entre el **precio de mercado** y el **avalúo**, ya que señala que se considerará el precio de mercado o en su defecto el del avalúo por lo que no puede considerarse que tal y como lo sostiene la autoridad el precio de mercado es el plasmado en el avalúo.

Por lo que se concluye que el precio de mercado es aquel pactado entre las partes independientes y tomando en consideración el orden de prelación establecido en el precepto apenas transcrito se considerará el precio de mercado en primer término y a falta de este el avalúo.

Cabe resaltar que la autoridad demandada no expone fundamento legal en el cual apoye su determinación respecto de que, en la operación celebrada entre terceros independientes, deba de considerarse como precio de mercado el establecido en el avalúo, sino que se limita a establecer que toda vez que no se respetó el precio señalado en el avalúo no se cumple con el requisito de que se haya llevado a cabo a precios de mercado y por tanto no resulta Impuesto al Valor Agregado acreditable.

Por tanto, la resolución recurrida, de la cual se advierte que la autoridad determinó que en relación con el impuesto al valor agregado acreditable en cantidad de \$*****, toda vez que no la actora no cumplió con el requisito de acreditamiento establecido en la fracción I del artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente en enero de 2016, es decir que no resulta estrictamente indispensable toda vez que proviene de erogaciones realizadas por la contribuyente que no son deducibles para efectos de impuesto sobre la renta en la parte del excedente del precio de mercado, ello en virtud de que no cumplió con el requisito de deducibilidad consistente en que el costo de adquisición corresponda a los de mercado y cuando excedan del precio de mercado no será deducible el excedente, mismo que en el presente caso corresponde a la adquisición de las ***** ***** ***** * *** ***** ** ***** ** * ***** ***** ***** ***** ***** ** ***** **, en virtud de que fueron adquiridas a un valor que excede del precio de mercado; la misma se encuentra indebidamente fundada y motivada, siendo **fundados** los argumentos del actor.

En virtud de las conclusiones alcanzadas a lo largo del presente fallo, se declara la nulidad de la resolución impugnada, así como de la originalmente recurrida, y se le reconoce el derecho subjetivo al impetrante a la devolución de las cantidades solicitadas, por lo tanto, la autoridad demandada deberá de emitir una nueva resolución debidamente fundada y motivada en la cual con base en los razonamientos expuestos en el presente fallo determine que:

~ 97 ~

- El monto de \$**'***** ** ***** *****
***** ** * ***** * ***** ** * ***** *****
***** ** * ***** ** ***** ** \$*****'***** *****.
- Por lo que hace a la cantidad *'***** ** *****
*** ***** ** * ***** ** ***** *****
***** * * * * * ***** ** ***** *****
*** ** ***** ** ***** ** * * * ***** ** *****.
- Proceda a realizar la devolución de saldo a favor solicitada, entregando las cantidades resultantes debidamente actualizadas en términos de lo establecido en el Código Fiscal de la Federación.

Por lo hasta aquí expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 46, fracciones I y III, 49, 50, 51 fracciones II y IV, y 52, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el diverso 31, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se **RESUELVE:**

I.- Se **HA CONFIGURADO LA NEGATIVA FICTA** impugnada.

II.- La parte actora **acreditó su pretensión**, en consecuencia:

III.- Se **DECLARA LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA Y DE LA RESOLUCIÓN FICTA IMPUGNADA**, por los motivos y para los efectos señalados en la parte final del presente fallo.

IV. Mediante atento oficio que en el TÉRMINO DE VEINTICUATRO HORAS se gire en vía de informe al Presidente del Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia

Administrativa del Primer Circuito, remítasele copia certificada del presente fallo como cumplimiento de la ejecutoria que ha quedado indicada en el proemio de la presente resolución.

NOTIFÍQUESE.-

Así lo resolvieron y firmaron **por unanimidad** los Magistrados que integran la Tercera Sala Regional en la Ciudad de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ante la Secretaria de Acuerdos que da fe, quienes quedaron debidamente identificados en el proemio de la presente resolución, firmando al calce.

JOSÉ NAPOLEÓN FILLAT MARTÍNEZ

Magistrado Titular de la Primera Ponencia e Instructor del presente juicio de la Tercera Sala Regional en la Ciudad de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

CELINA MACIAS RAYGOZA.

Magistrada Titular de la Tercera Ponencia y Presidente de la Tercera Sala Regional en la Ciudad de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

JORGE OCTAVIO GUTIÉRREZ

VARGAS

Magistrado Titular de la Segunda Ponencia de la Tercera Sala Regional en la Ciudad de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

JORGE ALBERTO CAMARGO CASTELAN

Secretario de Acuerdos de la Tercera Sala Regional en la Ciudad de México del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

“El 5 de noviembre de 2025, el/la licenciada/o Jorge Alberto Camargo Castelán, Secretaria/o de acuerdos con adscripción en la Tercera Sala Regional en la Ciudad de México, hago constar y certifico que en términos de lo previsto en los artículos 120, 115, párrafos, primero, segundo, tercero y cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta versión pública suprime toda aquella información considerada legalmente como confidencial, por tratarse de nombres de personas físicas, lugares de nacimiento, grupo étnico, estado civil, domicilio, ocupación o profesión, datos de identificación de vehículos particulares, ubicación de inmuebles, descripción de personas físicas, cuantías, etc. Conste.”